

La caída de Velasco

EL PERÍODO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA comienza con la crisis del reformismo militar, en la primera mitad de 1975, proceso que desemboca en la caída de su líder, el general Velasco. En esos meses fracasa el intento de institucionalización política de las reformas, poniendo en actividad tanto a las fuerzas militares como civiles que empezarían a buscar una nueva salida política.

A. ¿VELASQUISMO O REFORMISMO?

Existe la tentación cuando se busca periodizar el reformismo militar de referir su término al desplazamiento final de los últimos oficiales reformistas de posiciones de poder, en julio de 1976, sin embargo, creo más adecuado señalar el momento final del reformismo en agosto de 1975, con el golpe de Morales Bermúdez contra Velasco. Esto lleva a identificar velasquismo con reformismo militar, y a darle a su conductor, el general Juan Velasco, una relevancia particular. A riesgo de establecer un corte abrupto, creo que Velasco tanto por su condición de líder del proceso como de jefe militar, era el centro de poder que permitía conjugar el apoyo de las Fuerzas Armadas y la iniciativa del grupo de militares y civiles que dieron perfil ideológico y político y empujaron las reformas. Desaparecido Velasco de la escena política ese centro de poder desaparece también, permitiendo la acción de otras fuerzas, en particular los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas, que recuperan la iniciativa e inician el desmontaje de las reformas. Es cierto que el desmontaje no se produce de inmediato pero la fuerza e iniciativa política desaparecen y con ellas el reformismo como proceso y como

período político. Carlos Franco (1986:415) que es quien con más fuerza sostiene esta perspectiva, relata una anécdota dramática, sobre una visita a Velasco poco después del golpe, oportunidad en la cual éste le dijo: "Franco, explíqueme, ¿cómo pueden seguir hablando de revolución si la revolución...era yo?" Esta situación ilustra cómo las ventajas que permiten el inicio del proceso reformista, donde el liderazgo de Velasco juega un papel fundamental, se manifiestan como problemas en su crisis.

Esta identidad entre reformismo y velasquismo nos permite señalar un período de crisis del proceso que estrictamente va del 5 de febrero de 1975, cuando se producen graves desórdenes callejeros en Lima, a propósito de una huelga policial y el gobierno tiene dificultades para controlar la situación, al 29 de agosto de 1975 en que se da el golpe contra Velasco. Este período, por supuesto, tiene antecedentes en los conflictos que se agudizan a partir de 1973, tanto en la Fuerza Armada como en el movimiento social, así como en la propia crisis económica, y, remanentes, que se terminan de liquidar en julio de 1976, con la salida de los últimos oficiales radicales. Antes del 5 de febrero el gobierno todavía podía controlar la situación y luego del 29 de agosto, como señalamos, ya no existe el articulador central de poder, ni la correlación de fuerzas, que permite llevar adelante las reformas.

B. LAS TESIS SOBRE LA CRISIS

La discusión de los diferentes puntos de vista sobre la crisis final del reformismo cobra especial importancia, porque su resultado marcará las características de la transición. La particularidad contradictoria que señaláramos líneas arriba entre forma política autoritaria y consecuencias sociales profundamente democratizadoras se hará presente con distintos énfasis en todos los autores.

Cotler (1985a, 1988, 1990) será quien remarque más la forma política autoritaria del régimen, señalando que profundiza la tradicional distancia establecida entre Estado y sociedad por el dominio oligárquico, es decir que las reformas por su carácter totalizante y excluyente, al pretender, según él, organizar a toda la población bajo un solo horizonte político, no son capaces de tener consecuencias integradoras y más bien llevan al

aislamiento de los militares. Esta perspectiva subestima los efectos del velasquismo en la sociedad y señala que la movilización social se dió contra los deseos de los militares, que más bien habrían estado guiados por razones de tipo preventivo contrainsurgente desde el planeamiento del golpe del 3 de octubre de 1968. Aquí los militares son vistos como un bloque, se ignora el proyecto político de movilización social del velasquismo y se asume el punto de vista tradicional frente a las dictaduras militares de derecha: su autoritarismo las lleva al aislamiento y nada bueno pueden brindar a la sociedad. Lo más grave en esta perspectiva es que no toma en cuenta los elementos democratizadores del velasquismo, por lo que la posterior democratización política sería nada más que la negación del autoritarismo militar.

Franco (1986), plantea con mucha claridad la contradicción entre autoritarismo y democratización social, sin embargo, solo ve las consecuencias sociales de la movilización que impulsara el propio velasquismo y al constatar su fracaso desarrolla una perspectiva pesimista sobre los demás movimientos sociales. Esta visión unilateral lo lleva a no tomar en cuenta que las condiciones propiciadas por las reformas permitieron el surgimiento de movimientos, generalmente bajo influencia de la izquierda marxista-leninista, que desarrollaron un espacio social propio, autónomo del Estado. La crisis del reformismo es entonces para Franco una crisis en las alturas y más específicamente en la institución militar. Los problemas centrales están para él en la ruptura del grupo militar que apoyara a Velasco y en las consecuencias que esto tuvo en el control de las Fuerzas Armadas. La referencia a los militares como aquellos que tomaban las decisiones, parece ser, por lo demás común entre los que trabajaron con el reformismo. La encontramos también en Rafael Roncagliolo, periodista que apoyara al velasquismo, cuando al entrevistarlo nos dice: "Los civiles eramos fusibles, los actores verdaderos son militares. El gobierno, las tendencias y los centros de poder son militares. Lo que hacemos los civiles es adherirnos con nuestra capacidad crítica." Esta perspectiva, sin embargo, resalta un aspecto importante, el nivel en el que se tomaban las decisiones, inherente a un régimen castrense.

Nieto (1983), en una posición bastante representativa de la izquierda radical de los setentas toma un punto de vista contrario a los dos anteriores, para él la crisis tiene que ver, principalmente, con la resisten-

cia popular a la ofensiva corporativa del gobierno. Aquí se retoma en algún sentido el aspecto que deja de lado Franco, sin embargo, no se le ubica en la crisis global que atravieza a la institución militar y en particular al grupo de oficiales comprometidos con las reformas, por lo que podría dar la impresión, si se le toma por toda explicación, que el velasquismo fue copado por la sociedad.

Por último Stepan (1978) ve todo el proceso como un problema de cohesión institucional. Señala que la cohesión que sirvió a los militares para tomar el poder fue un obstáculo para institucionalizar el régimen. Aquí las contradicciones al interior del régimen como su interacción con la movilización social están ausentes. Además, tal como vimos, dicha cohesión institucional no existió en el momento de la toma del poder, sino más bien un liderazgo sobre la institución que las circunstancias del gobierno erosionaron luego. Lo que sí es importante rescatar es la atención de Stepan sobre los temores de la institución militar respecto de una institucionalización política de las reformas. Este es un tema que estuvo en el centro de la crisis del reformismo.

La crisis del reformismo y su expresión más alta en la caída de Velasco no pueden ser vistas unilateralmente como una crisis en las alturas o el resultado de una movilización popular. Existieron ambas porque ambas estaban inscritas en la naturaleza misma del proceso reformista. Este es un cambio producido desde el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, que produce una vasta movilización popular, en apoyo y en oposición a las reformas, propiciada y a la vez reprimida por el propio Estado, de acuerdo a las demandas que se enarbolaran y al curso que tomaran los acontecimientos. La crisis tiene que ver entonces con la forma como este gobierno autoritario impacta a una sociedad en proceso de movilización, pero todavía mayoritariamente desorganizada, así como con la respuesta que viene desde abajo. Esta respuesta, a su vez, divide al gobierno, atemoriza a la institución militar, afecta el sistema de poder que permitía el liderazgo de Velasco y desata la crisis.

C. EL CONFLICTO MILITAR Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

Asumiendo que el conflicto al interior de las Fuerzas Armadas es algo casi permanente durante el velasquismo, es preciso, sin embargo,

distinguir el conflicto entre los sectores conservadores en las diferentes armas y el velasquismo, del conflicto al interior del grupo velasquista. Asimismo, para el análisis de estos enfrentamientos es importante tener en cuenta el grave deterioro de salud de Velasco, desde marzo de 1973. Diversos observadores y participantes en el proceso, como los generales Morales Bermúdez y Fernández Maldonado, coinciden en la importancia de este deterioro de la salud de Velasco para la crisis del reformismo, en particular por como afecta la conducción del proceso, donde, como hemos reiterado, su liderazgo era una pieza clave.

El conflicto entre los sectores conservadores y el velasquismo tiene 3 momentos. El primero, en la instalación del régimen, cuando Velasco debe hacer concesiones a sectores conservadores, sobre todo dentro del propio Ejército, otorgándoles ministerios, para asegurarse su apoyo. Estos sectores pretenden desplazarlo cuando observan el giro radical que van tomando los cambios, pero Velasco, aliado con los oficiales que lo acompañan en el golpe, los pone de lado y desarrolla el proyecto reformista. De esta forma, asegura la lealtad de las Fuerzas Armadas y sobre todo del Ejército, asentando su gobierno y su liderazgo.

El segundo, es un conflicto de mayores proporciones, enfrentando al grupo velasquista con la Marina. En este caso se trata del enfrentamiento con toda una institución, que en todo momento había estado en desacuerdo con el proceso reformista pero que había tenido que subordinarse por su menor tamaño y poder relativo en las Fuerzas Armadas. Es un conflicto que sucede entre principios de 1973 y mayo de 1974, casi coincidente en su inicio con la enfermedad de Velasco y luego de que se han producido casi todas las reformas importantes del proceso. Se da precedido por años de agudo enfrentamiento entre el velasquismo y las clases propietarias, que habían sido afectadas por las reformas y cuya protesta no había tenido mayor éxito. Los temas del conflicto, levantados por el Jefe de la Marina, Vice-Almirante Luis Vargas Caballero, son el derecho a la propiedad privada y a la libertad de expresión, así como la pertenencia del Perú a la "tradición occidental y cristiana" de donde pretendería alejarlo la "infiltración comunista", verdadera inspiradora de las reformas según estos conservadores. Pero por comunistas no solo entendían al Partido Comunista y su accidentada relación con el gobierno, sino a todos aquellos que cuestionaban el monopolio de la propiedad

privada e impulsaban la organización del pueblo. Comunistas eran entonces no solo los partidos marxistas sino también el SINAMOS, los militares velasquistas y sus aliados, es decir, todos los que negaban el orden oligárquico. Los sucesivos incidentes de desarrollo del enfrentamiento se dan cuando el jefe naval muestra solidaridad con los gremios de empresarios y/o políticos de derecha que esporádicamente hacen declaraciones contrarias al gobierno. En particular cuando se trata de defender a algún medio de expresión de esa tendencia. El propio Vargas Caballero (Tello 1983, 2:180) señala, su primera reacción frente al golpe: "Yo lo que tenía era un rechazo al hecho de que se hubiera producido un movimiento revolucionario" y luego, relatando sus problemas como ministro dice: "todos estamos de acuerdo en que había que hacer transformaciones pero dentro del sistema democrático, dentro del sistema de gobierno en el cual se reconoce la propiedad privada, la iniciativa privada, en el cual hay libertad de expresión". Las referencias a la democracia anterior a 1968, con la que termina el velasquismo, así como su defensa del derecho fundamental a la propiedad para las clases que habían sido afectadas, y de los medios de expresión de derecha que eran portavoces de aquellas, lo hacen casi un representante del antiguo régimen y muestra las agudas contradicciones con las que convivía el velasquismo. Velasco decide enfrentar al Almirante, pasando al retiro a él y a tantos jefes navales como fue necesario hasta encontrar a uno que no se opusiera al proceso. Con esta acción asestó un duro golpe a las posiciones conservadoras, tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la unidad institucional quedó seriamente mellada y las heridas abiertas se mostrarían un año más tarde en la conspiración para el relevo de Velasco, tercer momento al que nos referiremos en los acápite siguientes.

Pero esta distancia entre el reformismo y las fuerzas de derecha, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, se hará aún mayor con la expropiación de los diarios de circulación nacional, que se produce en julio de 1974. Estos eran los únicos voceros con que contaban las posiciones conservadoras, al estar sus partidos políticos prácticamente inactivos y sus contactos militares replegados, por lo que la acción los afecta seriamente, polarizando aún más el panorama político y contribuyendo a profundizar el autoritarismo militar. Las intenciones reformistas de entregar los periódicos a diferentes sectores sociales, organizados por

el proceso, no llega nunca a concretarse, pasando la prensa diaria de ser el oligopolio de unas cuantas familias oligarcas a ser un monopolio estatal. Este es quizás el ejemplo más claro del fracaso del proyecto reformista, donde el poder expropiado a la oligarquía teme ser entregado a la organización social y prefiere conservarse como prebenda burocrática.

El conflicto al interior del grupo velasquista es de naturaleza diferente y tiene que ver, más específicamente, con la forma como el gobierno promovía la movilización social. Su importancia para la crisis del velasquismo creo que es definitiva. Muy difícilmente los sectores opuestos a las reformas podrían haber propiciado la caída de Velasco, por lo menos en la forma y los tiempos en que se dió, sin una división del grupo velasquista. Su desarrollo es claramente perceptible en la etapa final del velasquismo, entre 1974 y 1975, como el conflicto que domina la escena política y va a resultar en el golpe contra Velasco. El tema de la organización popular es central en este conflicto por una reconocida resistencia de las Fuerzas Armadas a que el gobierno propiciara una acción de este tipo. Fernández Maldonado señala así que: "el proceso llegó a un límite por la aprehensión de la Fuerza Armada a que el pueblo se organizase. Ese era el elemento central" y Cisneros reitera: "los problemas empezaron con la organización del campesinado, con la CNA y SINAMOS como el embrión de la organización política". Sin embargo, ¿qué permite que este conflicto se desarrolle de 1974 en adelante? La crisis económica. 1974 es el año en que el velasquismo empieza a dar muestras de agotamiento económico y uno de sus primeros síntomas era la multiplicación de las huelgas, que venían en alza creciente desde el año anterior. Al natural aumento de las demandas sociales producto de las reformas, se sumaban ahora demandas mayores que permitieran contrarrestar los iniciales efectos de la crisis. Esta situación es la que deja al descubierto los conflictos al interior del velasquismo.

Se suele señalar las facciones antagónicas como "la misión" y "los militares progresistas" (Pease 1977). Hay resistencias, sin embargo, de los actores que se pueden syndicar como líderes de uno o el otro grupo, explícitamente los generales Fernández Maldonado y Javier Tantaleán (Tello 1983, 2:135) así como de algunos analistas (Franco 1986:395-415), a distinguir grupos tan definidos. Quizás los diferentes periódicos que controlaban sectores proclives a cada corriente hicieron aparecer la

polémica más profunda de lo que era y las normas castrenses tampoco permitieron a los oficiales involucrados una expresión totalmente clara de sus puntos de vista. Por otra parte existe también un grupo intermedio, el de los intelectuales que trabajaban en SINAMOS, que gusta de considerarse equidistante de las simpatías pro-comunistas de los "progresistas" y el controlismo de "la misión", sin embargo, para efectos prácticos los consideraremos dentro de la tendencia "progresista" por desarrollar una similar apertura frente a las distintas expresiones del movimiento social.

El caso es que se desarrollaron corrientes en el proceso que se distinguían por diferentes formas de actuar frente a hechos concretos, en particular relacionados con la organización popular. Estas corrientes se encarnaban en distintos jefes militares, los cuales van a presentar características comunes. Por un lado están los ministros que favorecían una política controlista del movimiento social y estando a cargo de ministerios claves como Trabajo, Interior, Pesquería e Industrias, implementan operativos coordinados con los servicios de inteligencia para el trabajo de paralelismo y división sindical. A estos se les conoce por el apelativo periodístico de "la misión". Su labor, es la que más precisamente se puede denominar corporativa y sus objetivos no se restringen a las organizaciones que crea el gobierno sino que se extienden a enfrentar la extensión creciente de la influencia izquierdista, que para ellos abarcaba desde la otra ala del gobierno hasta el Partido Comunista y los sectores de la izquierda radical. Los *une*, por lo demás, una lealtad incondicional a Velasco, basada, sobre todo, en la amistad personal. Por otra parte tenemos al sector que demuestra una apertura mayor frente al movimiento social y es proclive a tomar en consideración a las organizaciones ya existentes, incluso si estas mantienen discrepancias con el gobierno. Está conformada por jefes militares miembros del grupo inicial de coroneles que dió el golpe con Velasco y que en su mayoría evoluciona hacia posiciones radicales. Ocupan ministerios como Energía y Minas, Transportes, Agricultura y Alimentación, y en un primer momento tienen la dirección de SINAMOS, que luego, en 1974 y 1975, pasaría al control del otro grupo. Ellos son a los que en el debate cotidiano se les conoce como "los militares progresistas". De 1974 en adelante, su contacto con Velasco se reduce, quizás porque sus consideraciones de lealtad tenían un perfil ideológico más claro y ello alimenta

la desconfianza que el propio líder desarrolla en su entorno a partir de su enfermedad.

Como señalamos, el conflicto entre ambas tendencias, para los ojos del público, se desarrolla más en la polémica periodística de sus adherentes civiles, que en conflicto entre jefes militares. Las denuncias, sin embargo, de un grupo contra el otro, por las acciones que se realizan a nivel de las organizaciones de base empieza a tomar resonancia nacional, en particular en torno a la división de CONACI y las actividades del MLR. A fines de 1974 y 1975, ambas cuestiones enfrentarán no solo a una tendencia del gobierno contra la otra, sino a la tendencia denominada "progresista" muchas veces en alianza o con el apoyo de otros sectores de izquierda marxista, contra los sectores "controlistas". Con el deterioro de la situación económica el gobierno había empezado a variar el énfasis de su discurso poniendo por delante la consigna de "más producción" (Pease 1977:187), frente a la cual la movilización popular se veía como una amenaza. La tendencia controlista sacará ventaja de esta situación para ganar posiciones dentro del propio gabinete y aparecer a la vez más responsable y opuesta a la infiltración comunista. Será en torno a este debate que en enero de 1975 se produce por primera vez una toma de posición de Velasco. Opinará inusitadamente sobre el que era quizás el problema más espinoso del momento: las actividades del MLR. Frente a unos que le negaban al grupo calidades "revolucionarias" y a los otros que se las atribuían, el líder señala:

"...qué derecho tiene el gobierno para rechazar a un individuo o grupo de individuos que vienen a abrazarnos y quieren darnos su apoyo más cercano...Qué derecho tendría el gobierno para decirles: "No, señor, no, ustedes no, no aceptamos"?...El Movimiento Laboral no es de ahora. Es antiguo. En Chimbote había un cierto modo de vivir extraño. La gente se criaba sin finezas de señoritos. Son hombres rudos y sus problemas los resolvían a palos, a chavetazos o a puñetazos, porque así se han criado. Esa gente resuelve sus problemas como hombres a punta de puñetes o a punta de palos. En cambio, hay otros, que por haber nacido en plumas o ser medio fifís, pueden discutir, pueden mentarse a la madre y sin embargo resuelven sus problemas a pañuelazos. Este Movimiento Laboral Revolucionario, desea prestar su apoyo más cercano a la Revolución, como anterior-

mente se ha formado el grupo de Trabajadores de la Revolución Peruana. Nosotros no podemos rechazarlos. ¿Con qué derecho? ¿Cómo les decimos "no, porque ustedes son unos criminales, unos fascistas"? y ¿quién dice a quién? Hay un sector que los acusa, pero con qué pedigree, con qué base un grupo califica a otro. Si la revolución intentara rechazar al MLR también debe rechazar al otro grupo. Pero si no hemos rechazado al comunismo por qué quiere el comunismo rechazar al MLR? Por qué no conviven, por qué no hacen suya la Revolución ciento por ciento y se vuelven todos participantes?"

Esta no es la versión oficial, que más bien aparece muy moderada en sus referencias al MLR, es la versión que publica el N° 509 de la revista *Caretas*, sin embargo, periodistas presentes aseguran que es la versión verdadera. En cualquier caso, su veracidad como versión y las modificaciones que sufre para salir a la luz pública manifiestan las contradicciones que atravesaba el proceso, así como las inclinaciones de Velasco por salidas más autoritarias y controlistas. A este punto de agudización había llegado el conflicto al interior del grupo velasquista cuando se producen los hechos del 5 de febrero de 1975.

D. EL CINCO DE FEBRERO

El sociólogo Sinesio López, me decía alguna vez que en los sucesos del cinco de febrero estaba inscrita la caída de Velasco. ¿Qué sucedió en esa fecha? Una huelga policial deja a Lima desguarnecida motivando que turbas de composición popular (Panfichi 1983) procedieran al saqueo de tiendas comerciales en el centro de la ciudad. Asimismo, estudiantes universitarios, parece ser que de orientación aprista, atacan dos periódicos, recientemente expropiados, que se destacaban por su apoyo al gobierno, logrando destruir las instalaciones de uno de ellos. El Ejército debió salir a reprimir tanto la huelga como los desórdenes, con un resultado de 86 muertos, 155 heridos, 1,012 detenidos y 53 policías enjuiciados (Panfichi 1983:34, Kruijt 1989:200).

La policía era un aparato de seguridad que sentía su situación disminuída frente a las instituciones integrantes del gobierno militar y aspiraba al control del Ministerio del Interior. Al mismo tiempo, el personal subalterno de las fuerzas policiales, era sometido por sus

superiores a una disciplina de corte militar que rayaba en el abuso e incluso, a veces, en la servidumbre. Esta situación explota a fines de diciembre de 1974 cuando el Jefe de la Casa Militar de Velasco insulta y abofetea a uno de los guardias encargados de la custodia de Palacio por haber dejado acercarse a los periodistas al Presidente. Se suceden varias amenazas de huelga que finalmente se concretan el 3 de febrero, llevando a los incidentes del día cinco. El gobierno reacciona tarde y con dificultad. Incluso el encargado directo de reprimir la huelga y los disturbios, el Jefe Militar de Lima, General Leonidas Rodríguez, destacado miembro del grupo "progresista", no mueve a sus tropas sino hasta las once de la mañana del día cinco, argumentando que no tenía orden escrita, lo que permite que se extiendan los disturbios por la ciudad. El General Aníbal Meza Cuadra, en ese entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército, señala que se actuó con tal falta de coordinación de parte de las autoridades y que él no excluye que estos incidentes fueran uno de los planes alternativos para desplazar a Velasco (Kruijt 1989:198).

Por más que no se pueda detectar con precisión una intencionalidad política directa, los sucesos del cinco de febrero expresan una manifestación de descontento de envergadura mayor, cuya resonancia crece por haber sucedido en el centro de Lima, capital de la República. Velasco, en un discurso pronunciado luego de los incidentes, acusa al APRA como promotora de los desórdenes, pero ésta niega su participación y, más allá de la concurrencia de jóvenes apristas entre la muchedumbre, no se aportan otras pruebas contundentes. Los disturbios del cinco de febrero más parecen ser el funcionamiento de una válvula de escape en una sociedad que se intentaba remodelar desde arriba, concediéndole derechos, pero sin mecanismos de participación política visibles. Por primera vez durante el reformismo, se da una sensación generalizada de descontrol y de represión abierta, mellándose, como resalta Kruijt, el prestigio del gobierno al haberse disparado contra la población. Esta situación repercute negativamente en las Fuerzas Armadas, "empiezan a escaparse las cosas de las manos" dice el General Cisneros, que en ese momento adhería a una posición institucionalista.

Esta sensación de descontrol va a tener como consecuencia una grave erosión de la legitimidad que los militares habían ganado con las reformas. Será un punto de viraje en el proceso reformista que llevará a

los diferentes actores a la búsqueda de salidas políticas que los conviertan en alternativas viables al deteriorado velasquismo. Roncagliolo, relevando la coyuntura, llama a los meses siguientes el momento "post-cinco de febrero". Las distintas tendencias dentro del gobierno encaran el problema de la institucionalización política de las reformas y los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas que se encontraban replegados desde el conflicto de la Marina con el gobierno empezarán a querer expresar la preocupación institucional por la incertidumbre reinante. Asimismo, y a pesar de los ataques que continuaban sufriendo de parte de los medios de comunicación controlados por el Estado, se rumorea que los partidos tradicionales¹¹ empiezan a tener contactos con jefes militares. En especial, se dice que el APRA, en los días siguientes al cinco de febrero, llega a plantear demandas específicas al gobierno a cambio de moderar su oposición al mismo. Esto podría ser el primer antecedente del acercamiento aprista a los militares, que no se concretaría sino en el siguiente período. Sin embargo, la capacidad de acción de estos partidos en la coyuntura es todavía restringida, debiendo depositar sus esperanzas en sus contactos militares.

La izquierda marxista, por su parte, aprovechará también la coyuntura para expresarse políticamente. En los años anteriores había estado confinada al trabajo sindical y universitario. Solo el PC, vía el desarrollo de la CGTP, había tenido expresión nacional. Sin embargo, la experiencia de combate al autoritarismo militar, sobre todo al MLR, le había permitido extender su influencia y empezar a aparecer en la escena nacional. El 5 de febrero, será una coyuntura en que algunos grupos, sobre todo el Partido Comunista y Vanguardia Revolucionaria, tratarán de buscar alianzas con los sectores radicales del gobierno, para enfrentar lo que, a través de la huelga policial, se veía como una "ofensiva reaccionaria", en la que se mezclaban, desigualmente, la derecha militar, los partidos tradicionales y el Servicio de Inteligencia Norteamericano (CIA). Los

11 Entiendo por "partidos tradicionales" al APRA, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular, que eran los partidos dominantes en el período de crisis del orden oligárquico, inmediatamente anterior a 1968. En la coyuntura objeto de estudio el APRA aparece como un partido de centro, que buscaba ser puente entre el gobierno militar y un futuro régimen democrático, mientras que AP y el PPC aparecen como grupos de derecha, que defienden a las clases propietarias y exigen el inmediato retiro militar.

temores por ambas partes, los militares "progresistas" y la izquierda, serán, sin embargo, tan grandes, que nada se llega a concretar. En el Partido Comunista una posición de este tipo no era novedad, pero en los sectores más radicales significaba un cambio de proporciones que les hubiera permitido pasar de la esfera sindical a la propiamente política. Se imponen las visiones más dogmáticas, que impedían todo contacto con institución estatal alguna e incluso repudiaban al PC por su acercamiento al gobierno. Esta actitud llevaría a la continuación del confinamiento de gran parte de la izquierda al plano sindical y al desarrollo de dinámicas paralelas entre el movimiento social y la escena política, lo que paradójicamente le daría gran desarrollo a esta izquierda marxista, sobre todo a sus sectores radicales, pero muy poca capacidad de representación política.

El proyecto de "democracia social de participación plena" levantado por el velasquismo era lo que estaba en cuestión. Las diferentes tendencias dentro del gobierno planteaban distintas formas de llevarlo adelante, mientras aquellos opuestos a las reformas empiezan a agruparse para plantear alternativas. La institucionalización política de los cambios que se venían desarrollando debería ser un paso fundamental en la plasmación de esta "democracia social de participación plena" como régimen político nacional, razón por la que se genera un arduo debate dentro del gobierno. Unos intentaban continuar con la política controlista que venían desarrollando con relativo éxito, animados sobre todo porque parecían inclinar el liderazgo de Velasco a su favor, mientras que otros apuraban la constitución de una organización política, donde eventualmente podrían coordinar con organizaciones de izquierda. Esta última tendencia forma, inmediatamente después del 5 de febrero, un "Comité de Organizaciones Populares", formado por organizaciones sociales que apoyan al régimen y luego un "Movimiento de la Revolución Peruana" formado por diferentes personalidades también ligadas al gobierno. Su iniciativa no logra cuajar y más bien el gobierno mismo toma el asunto en sus manos formando una comisión de ministros militares y publicando, hacia fines de febrero, un documento de "Bases Ideológicas de la Revolución Peruana", donde buscaban conciliarse los distintos puntos de vista. No será sino hasta julio de 1975, casi en las postrimerías del velasquismo, que se anuncia la formación de la "Organización Política de la Revolución Peruana", OPRP, cuya

comisión organizadora estaba formada principalmente por burócratas estatales, con escasa ligazón con el esfuerzo de movilización social desplegado por el propio régimen, por lo tanto con mínimas posibilidades políticas.

Tenemos entonces que en esta coyuntura crucial "post-cinco de febrero" no se logra cristalizar la organización política del proceso reformista. Varias son las causas que concurren para que esto suceda. La división del grupo velasquista, en primer lugar, que hace que el gobierno se desgaste en pugnas intestinas, restándole capacidad para continuar las reformas. La salud de Velasco, que sufre un nuevo deterioro en el mes de febrero, debilitando aún más el liderazgo y aumentando las preocupaciones concernientes en todos los actores involucrados, relativas a su desplazamiento o sucesión. Los rumores de un conflicto bélico con Chile que toman importancia, en especial luego del golpe contra Allende y la cercanía del centenario de la Guerra del Pacífico, entre Perú y Chile, en 1979. La crisis económica, que se profundiza, más allá de las razones estructurales que la causaban, con el deterioro de los precios internacionales para los productos peruanos de exportación. Por último y con particular relevancia, los temores de la institución militar, tanto por el rumbo político del proceso reformista como por su propia situación interna. El General Morales Bermúdez llama la atención, en este sentido, por la situación que él nota a principios del año 1975 cuando se hace cargo de la Comandancia General del Ejército, calificándola de "polarización muy clara, muy marcada" en las Fuerzas Armadas, que lo lleva a temer pudiera derivar en conflictos mayores entre las diferentes tendencias.

En la Marina la oposición era frontal, y explícita luego del conflicto con el Vice-Almirante Vargas Caballero. Esta actitud los lleva a sublevarse nuevamente en junio de 1975 para exigir el cambio de su Comandante General, que había sido elegido por Velasco, por uno elegido por ellos, lo que les permite recuperarse de la humillación sufrida un año atrás. En el Ejército los militares conservadores empiezan también a manifestar sus temores. El General Cisneros señala que luego del 5 de febrero se empiezan a reunir en el Cuartel General del Ejército un grupo de generales para considerar la necesidad del relevo de Velasco. Cisneros dice que este grupo mantiene contactos con oficiales de la Marina y la Aviación y con el General Morales Bermúdez, en ese momento Co-

mandante General del Ejército y Primer Ministro y más tarde Presidente. La oposición institucional de las Fuerzas Armadas expresaba razones coyunturales como las citadas: politización de la institución militar, deterioro del liderazgo, posibilidad de un conflicto bélico y la crisis económica, pero todas ellas no hacían sino manifestar una razón más profunda, la amenaza que sentían para su propia existencia como tales. Fernández Maldonado dice que la tentación controlista de la organización popular, expresada incluso por parte del propio Velasco, así como por algunos de sus ministros no hacían sino expresar ese temor institucional:

“Definitivamente había un temor de que el pueblo con toda esa fuerza revolucionaria pudiera rebasar a la Fuerza Armada. No en nosotros, la vanguardia militar, sino en la Fuerza Armada como conjunto. Y Velasco no quería confrontarse con la Fuerza Armada... Sala, Richter, Tantaleán, (ministros ligados a posiciones controlistas) estaban en esa...expresaban ese temor.”

Este temor, que lleva a limitar la actividad de SINAMOS desde un primer momento, es el que se traducirá en controlismo primero y en oposición institucional luego del 5 de febrero. Los actores que están detrás de cada actitud, no son por supuesto los mismos, ya que detrás de las actividades controlistas se encuentran oficiales miembros del grupo velasquista, que pasan a conformar progresivamente una tendencia y detrás de la oposición institucional se encuentra un espectro más amplio de fuerzas, pero con la participación muy activa de los oficiales más conservadores. Sin embargo, ambas son expresiones del espíritu castrense que cuida del rol privilegiado de la institución por encima de otras consideraciones. Si antes señalamos que la institución militar necesitaba, para continuar con su propio desarrollo, la modernización y nacionalización del Estado, ahora encontramos que el proceso de reformas, con las condiciones que había generado para la movilización del pueblo, representa, a ojos castrenses, un peligro para su existencia. Por lo demás, el gobierno se autodenominaba “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”, si se pensaba en una organización política del proceso era lógico pensar que la conducción militar estaría en cuestión. Quizás esto solo significaba, en el proyecto de los ideólogos militares y/o civiles del proceso, la creación de una nueva institucionalidad política donde la

Fuerza Armada tendría su lugar, pero las mayoría de los militares no lo entendían así. Parece ser que desconfiaban de cualquier nuevo proyecto de institucionalidad que no estuviera bajo su control, en particular si se trataba de un proyecto que planteaba transferir el poder "al pueblo organizado". Por más que las "imágenes participativas", en las palabras de Franco, fueran tan solo imágenes, involucraban a un actor: el pueblo, a pesar de los esfuerzos reformistas, ajeno a la perspectiva castrense. En cualquier caso este temor marca el límite final del reformismo.

E. LA RESOLUCIÓN AMBIGUA

El período que va de febrero a agosto de 1975 se caracteriza también por los esfuerzos de los diferentes agrupamientos militares por encontrar una forma de cambiar a Velasco en la conducción del gobierno. Pero los objetivos de cada cual eran diferentes: la Marina y otros conservadores querían un relevo para volver al viejo orden, la tendencia controlista del velasquismo aspiraba a profundizar un esquema corporativo y crecientemente autoritario, los "progresistas" querían "profundizar la revolución". Ninguno, empero, tenía la fuerza para llevar adelante por sí solo su alternativa manteniendo la unidad de la Fuerza Armada, por lo que se debían tejer alianzas. Sin embargo, las posiciones parecían tan alejadas en la coyuntura que no se veía cómo esto podría suceder.

La división del grupo velasquista descarta la posibilidad de una sucesión ordenada y aumenta la desconfianza del líder. Los diversos intentos de afrontar el problema fracasan y no se llega a un acuerdo formal entre Velasco y sus más cercanos colaboradores. Los relatos de Carlos Franco (1986) como del General José Graham (Tello 1983, vol.1), Jefe del COAP desde 1969, muestran en estos últimos meses a un Velasco solitario, aislado e incomunicado, como expresión de que el momento final de su gobierno se acercaba. Había, sin embargo, un hombre que tenía un amplio consenso institucional basado en una brillante carrera militar: el General Francisco Morales Bermúdez, que seguía en línea de mando a Velasco. Curiosamente su retórica radical lo acercaba a los "progresistas" y su profesionalismo a los institucionalistas. Ambos grupos mantenían contacto con Morales Bermúdez en esta época, los "progresistas" porque lo consideraban uno de los suyos y los institucionalistas, porque, como nos informa Cisneros, lo consideraban la

única carta de recambio. Incluso el propio Velasco llega a conversar con él sobre la necesidad de que se preparara para sucederle, sin que tampoco ningún procedimiento llegara a concretarse. Esta situación le permite a Morales Bermúdez, de acuerdo con las versiones de los Generales Cisneros y Fernández Maldonado, mantener relaciones con ambos grupos, aunque por el clima político reinante no se hicieran explícitos sus lazos con los oficiales más conservadores que aparecían como institucionalistas. Lo que en un momento no había parecido posible: que las tendencias que emergen del cinco de febrero pudieran entenderse, logrando la fuerza necesaria para derrocar a Velasco pero manteniendo la unidad de la Fuerzas Armadas, parece ahora realizado en la persona de Morales Bermúdez.

El clima de autoritarismo reinante en los últimos meses de gobierno de Velasco, por el predominio de la tendencia controlista, se ve exacerbado por una deportación masiva de 27 periodistas, dirigentes sindicales y políticos de izquierda y derecha a principios de agosto de 1975. La amplitud de la medida dice de su arbitrariedad y señala el nivel de desgaste y aislamiento al que había llegado el gobierno. Morales Bermúdez en coordinación con la tendencia "progresista" acelera los planes para el relevo de Velasco, fijando la fecha para mediados de setiembre. Sin embargo, en una forma de actuación que luego sería característica de su gobierno, sorprende a sus colegas y se subleva por decisión propia el 29 de agosto en la ciudad de Tacna, aprovechando una gira por el sur del país. "Progresistas" e institucionalistas sorprendidos y sin otra opción deben plegarse rápidamente. El General Juan Velasco abandona Palacio de Gobierno por una puerta lateral, solo lo despiden sus ayudantes más inmediatos. Habían terminado siete años de reformismo militar.

La Contrarreforma

LOS MOMENTOS DEL GOBIERNO de Morales Bermúdez que van del 29 de agosto de 1975 a la instalación de la Asamblea Constituyente tres años más tarde, por más que sean procesos definidos, no van a tener un perfil tan claro en el tiempo como sucede con las etapas del gobierno velasquista. Se intersecan por ello dos momentos básicos: el desmontaje de las reformas con la apertura política, así como los procesos de purga militar, ajuste económico, demanda y represión social, liberalización y democratización políticas que les son inherentes. Se pueden distinguir, sin embargo, dos momentos, uno de contrarreforma, donde se crean las condiciones para una salida política y otro de apertura, donde se procede a dicha salida.

Ahora bien, en el momento de contrarreforma es que sucede, principalmente, la liberalización política, en el sentido que la entienden Schmitter y O'Donnell (1986:7), es decir que se les concedieron derechos, o mejor dicho, se les devolvieron derechos, principalmente de reunión y expresión, a los gremios empresariales y a los partidos tradicionales, cuya actuación había estado seriamente recortada durante el reformismo. Sin embargo, es preciso remarcar el carácter unilateral de esta liberalización, ya que las organizaciones populares y los partidos de izquierda fueron más bien reprimidos. Por ello es importante señalar que en las condiciones que marca la contrarreforma es que se produce una liberalización parcial.

A. "LA PROFUNDIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN"

La alianza equívoca que da lugar al gobierno de Francisco Morales Bermúdez permitirá también un inicio equívoco para su administración. La primera consecuencia de este cambio de gobierno será la desaparición de la tendencia controlista de la organización popular, en particular del MLR, que se había vuelto predominante en los últimos tiempos del gobierno de Velasco, así como la revocación de sus medidas autoritarias, en especial la deportación masiva de principios de agosto de 1975. Ello crea un clima de cierta libertad política, en cuyo contexto el nuevo gobierno emite señales contradictorias.

Morales Bermúdez como puente entre dos tendencias que poco tenían en común, institucionalistas y "progresistas" opta al principio por la retórica radical de la que hacía gala dentro del grupo velasquista (Tello 1983:270). El mismo lo dice: "Yo en un primer momento quiero profundizar el proceso". Señala repetidamente, yendo incluso más allá de las "Bases Ideológicas", su especial adhesión "socialista", promete el 3 de octubre de 1975, aniversario del golpe de Velasco, "la transferencia del poder al pueblo organizado" (Nieto 1983:51) y da disposiciones radicalizando la reforma agraria y buscando impulsar la propiedad social. Pero, en lo que es quizá su intento mayor, crea el "Frente de Defensa de la Revoución Peruana" (FDRP) agrupando organizaciones sociales creadas por las reformas y pone al frente a Avelino Mar, un líder campesino de conocidas simpatías izquierdistas. Insiste de esta manera en buscar el camino de la institucionalización política del proceso reformista, que había sido la piedra de toque de la crisis del gobierno de Velasco. Dispone también la creación de una comisión especial que formule un nuevo plan de gobierno, la primera versión de lo que posteriormente sería el "Plan Túpac Amaru", con funcionarios, tanto militares como civiles, conocidos por sus simpatías izquierdistas.

Sin embargo, estos afanes radicales duran poco y se dan junto con disposiciones que claramente los contradicen. La más importante de estas es la remoción de los militares radicales que detentan posiciones de poder y la promoción consiguiente de oficiales conservadores. De igual forma, desde un primer momento el discurso oficial apela a la "unidad de todos los peruanos", a diferencia del discurso velasquista cuyo perfil

claramente anti-oligárquico excluía a los antiguos sectores propietarios afectados por las reformas de cualquier proyecto político futuro. En consecuencia, permite la expresión de la derecha política, que de inmediato pide, con insistencia, elecciones generales. Asimismo, endurece su posición frente a los reclamos laborales, recortando el derecho de huelga y llevando a la Colonia Penal de "El Sepa" a un grupo de abogados asesores sindicales, a la vez que flexibiliza su trato con los empresarios, sobre todo en cuanto a la estabilidad laboral y el consecuente despido de trabajadores. Esto último lleva a un paro regional de Lima y Callao de la CGTP, el 29 de diciembre de 1975, el primero de estas características desde 1968, en protesta por esta medida.

Es muy significativo que la posición del Ministerio de Trabajo sobre el asunto de la estabilidad laboral varíe casi desde el inicio del gobierno de Morales Bermúdez. La estabilidad laboral había sido la garantía básica que había permitido a los trabajadores organizarse durante el velasquismo, una flexibilización al respecto por parte del gobierno era uno de los gestos más significativos que podían recibir los empresarios. Sin embargo, el tema era tan delicado que el gobierno no se atreverá a convertir en ley su cambio de actitud sino hasta marzo de 1978, presionado en ese momento por una agobiante crisis económica y la necesidad urgente de apoyo empresarial.

B. LIMPIEZA MILITAR

La evidencia de estas contradicciones queda en claro con las palabras del propio Morales Bermúdez:

"En diciembre del 75 me doy cuenta de que la profundización del proceso se hace difícil, que lo mejor es contener, es decir, no retroceder...empiezo a observar el agotamiento, la crisis económica y la crisis institucional, expresada en que se comienza a quebrar la concepción jerárquica".

En este camino, de enfrentar los problemas de gobierno con una concepción institucionalista, le da preeminencia en la toma de decisiones importantes a la denominada "Junta Revolucionaria", convocándola regularmente. De esta manera el eje de poder empieza a variar, de estar

concentrado en el líder y prolongarse con su consentimiento al COAP o a algunos de los ministros de su entorno, pasa a estar en el Presidente y la Junta Revolucionaria, lo que indudablemente buscaba reflejar mejor los sentimientos institucionales. En esta línea de afirmación institucional es que proceden los cambios militares, favoreciendo mayoritariamente, por los temores que priman en los institutos castrenses, a las posiciones conservadoras. Se devuelve su autonomía a la Marina, respetando el nombramiento interno de sus mandos. Se pasa al retiro, en octubre de 1975, a los Generales José Graham y Leonidas Rodríguez, destacados velasquistas, el primero jefe del COAP y el segundo jefe militar de Lima. Se nombra, en setiembre de ese mismo año, jefe del SINAMOS al General Luis Cisneros Vizquerra, oficial conservador opuesto a la política de movilización social del velasquismo, por lo que su nombramiento implicaba, en conflicto flagrante con otras acciones que se tomaban al mismo tiempo, poco entusiasmo por parte del gobierno para esa labor. Algunos meses más tarde a principios de 1976, el General Cisneros es nombrado Ministro del Interior. Sin embargo, siguiendo esta misma línea institucional y con la oposición abierta de la derecha civil y militar, Morales Bermúdez nombra al General Jorge Fernández Maldonado, destacado militar radical desde los momentos de la conspiración velasquista, Comandante General del Ejército y por lo tanto, Ministro de Guerra y Primer Ministro. Los criterios son nuevamente castrenses, era el que seguía en antigüedad y de acuerdo a los reglamentos "le tocaba". Aunque el propio Fernández Maldonado aclare, de acuerdo a los cambios ocurridos: "Yo entro sin piso a la Comandancia General, ninguna de las regiones (militares) estaba conmigo".

Pero el cambio político fundamental, motivado por este criterio institucional, viene en febrero de 1976, cuando la comisión encargada de elaborar un nuevo plan de gobierno es invitada a hacer una exposición ante los generales del Ejército. Estos tienen una reacción abiertamente negativa frente a cualquier "profundización de la revolución", manifestándose en igual forma, por escrito, la Marina, la Aviación y la Policía, tal como señala el General Arturo Valdés, encargado del plan por Morales Bermúdez (Kruijt 1989:232-237). Parece ser que este consenso institucional, presionado por los conservadores, tal como se encarga de remarcar Cisneros, es el que lleva a Morales Bermúdez a tomar otro paso decisivo contra el grupo "progresista": cambia todos los directores de los

diarios de circulación nacional, expropiados por el gobierno desde julio de 1974, donde la izquierda gubernamental tenía influencia significativa y quizás si sus voceros más importantes. Esto sucede a mediados de marzo y le permite a Morales Bermúdez, en un discurso a fines de mes, atacar abiertamente a los sectores radicales del reformismo y anunciar que se está elaborando un nuevo plan de gobierno "sin modelos importados" y de acuerdo "a los anhelos de la Fuerza Armada y de las grandes mayorías del país" (Pease y Filomeno 1977a:1890-1897). Inusualmente el discurso recibe el respaldo inmediato, a través de un comunicado oficial, de la Junta Revolucionaria y el gabinete ministerial.

A este discurso siguen en el mes de abril la declaratoria en emergencia de los sectores minero y pesquero, de propiedad mayoritariamente estatal y cuyas exportaciones significaban un aporte en divisas importante para el comercio exterior. Esta "emergencia" implicaba la prohibición de hacer huelgas, en un intento por quebrar el sindicalismo "clasista" dominante en esos sectores. Asimismo, se produce el primer acercamiento explícito a un partido tradicional, cuando en la ciudad de Trujillo, Morales Bermúdez llama a una reconciliación entre el APRA y la Fuerza Armada, tradicionalmente enemistadas por las posiciones anti-militaristas de este partido en la época oligárquica. "Ahí -dice Morales Bermúdez- doy a entender que se va a iniciar un proceso de transición". De igual forma, se cortan los juicios que los gobiernos militares habían iniciado contra políticos y sindicalistas civiles, desde el período velasquista. Por más que el propio General Morales Bermúdez aclare que sus llamados conciliadores con el APRA no implican intenciones de convocar a elecciones, tanto el APRA como Acción Popular consideran "positivos" los gestos presidenciales (Pease y Filomeno 1977a:1932-1934).

Este conjunto de hechos van a significar un giro político fundamental en el gobierno, donde la influencia institucional de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones se vuelve muy importante, la represión al movimiento popular, en particular la violación de los derechos laborales que había dado Velasco, un patrón consistente y, a la par, se empieza a buscar una salida política a través de los partidos tradicionales. Como diría Carlos Delgado, principal ideólogo del velasquismo, en entrevista que le hace el diario El Excelsior de México, en junio de 1976, el gesto de

Morales Bermúdez “pareciera conducir a la restauración de la política tradicional”.

Este giro político se completaría en julio de 1976 con la remoción del Jefe del Ejército y Primer Ministro, General Jorge Fernández Maldonado. El cambio se produce luego de que uno de los jefes militares de Lima, el General Bobbio, se subleva contra Fernández Maldonado, lo que debilita la autoridad de este último y lleva a los otros jefes militares, de posiciones más conservadoras, a considerar su cambio. El General Cisneros señala al respecto:

“...el rechazo institucional no era al General Fernández Maldonado, sino a la posición ideológica del General Fernández Maldonado, que es comunista, y la Fuerza Armada no es comunista ni lo va a ser nunca”.

Tanto Fernández Maldonado como Cisneros no consideran estos hechos una cuestión fortuita sino el incidente final de una lucha por el poder que se venía librando casi desde el cambio de gobierno, en agosto de 1975, donde uno representaba el velasquismo y el otro la reacción conservadora. El uso de diferentes servicios de inteligencia a favor de uno y otro grupo, había sido repetidamente denunciada por ambos jefes al Presidente en los meses anteriores. Morales Bermúdez, en cambio, buscaba ponerse por encima de las contradicciones y señala que este incidente no hizo sino expresar la polarización existente en el Ejército entre diferentes posiciones políticas:

“Bobbio era un hombre con una mentalidad de derecha y Fernández Maldonado un hombre de izquierda, ahí se produce el choque...un hombre de izquierda en armas y un hombre de derecha en armas, demostración de que el proceso institucional se estaba politizando...Las instituciones empiezan a actuar como partidos. Un grupo en armas de la institución que desconoce a su Comandante General. Esto ya significa quiebra de la disciplina”.

Reitera así un punto de vista que había tenido sobre crisis militares anteriores, situación que según él, dañaba gravemente a la Fuerza Armada, de allí que contando con una mayoría de mandos del Ejército

que pedían el cambio de Fernández Maldonado, procede a su relevo. La limpieza de simpatizantes velasquistas no terminaría con este descabezamiento en la cúpula, en el mismo mes de julio de 1976 se produce un conato de golpe radical por parte de oficiales subalternos que es rápidamente debelado y parece ser que en los meses siguientes, según informa el General Cisneros, también suceden intentos similares en guarniciones de provincias que son igualmente controlados.

La salida de Fernández Maldonado se da en medio de una grave agudización del conflicto social. Tanto metalúrgicos como maestros, que se habían distinguido por su capacidad de movilización, desarrollan huelgas importantes. Asimismo, en el mes de junio, se habían sucedido tomas de fábrica en Lima, en particular en la zona de la carretera central, ante las múltiples solicitudes de los empresarios para reducir personal. En uno de los casos, en la fábrica "Nylon", los obreros se juntarían con la población aldeaña para enfrentar a la policía, sentando un patrón de lucha que luego se repetiría en otros lugares en los años siguientes. El deterioro de la situación económica lleva al gobierno a dar un nuevo paquete de medidas para estabilizar la situación, lo que agita aún más el encrespado ambiente laboral. Ambos aspectos, la crisis económica y el conflicto social, llevarán al gobierno, ya libre de elementos reformistas, a tomar medidas más abiertamente represivas antes de cualquier apertura política.

C. AJUSTE ECONOMICO

Los "ajustes económicos" o "paquetes", conjunto de medidas de política económica, que van, en diversos momentos, a tratar de solucionar la crisis que se desata con la quiebra del velasquismo, estarán estrechamente relacionados a los momentos claves de movilización social y crisis política del gobierno de Morales Bermúdez. Desde julio de 1975, en las postrimerías del gobierno de Velasco, los militares empezaron a tomar medidas correctivas de política económica. Como ya señalamos, la retórica oficial refirió los problemas a la economía mundial y el deterioro de los términos de intercambio y limitó sus correcciones al alza de precios de los productos básicos (mayormente alimentos) y topes en los salarios. Con el gobierno de Morales Bermúdez, esta dinámica de aumentar los precios y contener los salarios

se acentúa, tratando de restringir levemente las importaciones y dar incentivos para las exportaciones no tradicionales, principalmente industriales. Sin embargo, la crisis aumentaba y fue necesario, siempre dentro del esquema que entiende el problema como de balanza de pagos, proceder a medidas más duras que devaluaran la moneda, restringieran el gasto público, subieran los precios de los productos básicos y contuvieran severamente los salarios. Esto fue lo que sucedió a fines de junio de 1976, dos semanas antes del conflicto militar que lleva a la salida de Fernández Maldonado. El diagnóstico, que se trataba de mantener oculto en las anteriores "correcciones" aparecía ahora con más claridad. Se suponía que el problema era de "exceso de demanda" y por lo tanto había que restringirla, reduciendo la capacidad de compra de la población, la capacidad de gasto del Estado y la capacidad del país para importar. El diagnóstico que salía ahora a la luz, continuaría siendo el argumento central de los ajustes posteriores, en junio de 1977 y mayo de 1978.

Este era un diagnóstico, sin embargo, que se ubicaba en la dinámica de la contrarreforma. El "exceso de demanda", primero argumento empresarial y luego, recién en junio de 1976, argumento de los militares, aludía a una mejora de los salarios lograda por un sector reducido de la población, el proletariado industrial, entre 1968 y 1973. No era un aumento de los ingresos del conjunto de la población, que como ya vimos, sufrieron más bien un deterioro relativo durante el velasquismo. Sin embargo, el sector obrero que había logrado una mejora lo había hecho en base a un conjunto de derechos, garantizados por las reformas, que le habían permitido ganar poder social, tanto en la fábrica como en la sociedad. Estos derechos y las consecuentes ganancias eran lo que el gobierno buscaba restringir, para ganar el favor empresarial.

Pero había otro aspecto en que el gobierno de Morales Bermúdez no era tan riguroso como en la reducción de los salarios. Me refiero al gasto público. Durante el gobierno de Velasco se había desarrollado, como vimos, la intervención del Estado en la economía, que consumía importantes recursos públicos y que los militares se resistían a recortar en forma drástica por considerarla una fuente de poder y un ámbito de desarrollo para las propias instituciones castrenses. Asimismo están los gastos en armas, que alcanzan la cifra más alta de la década en 1977, con

548 millones de dólares (Dancourt 1986:58) y que los militares, por la posibilidad ya mencionada del conflicto con Chile, también se negarían a reducir. Esta actitud es la que, en el corto plazo, impediría la estabilización de la economía, no permitiendo que se llegara a un acuerdo final con los organismos financieros internacionales, en particular el FMI, al mismo tiempo que haría necesarios, dentro del mismo esquema de limitar el "exceso de demanda", los ajustes de 1977 y 1978.

Coyunturalmente, sin embargo, la combinación del ajuste económico de junio de 1977, junto con la depuración de los reformistas, tuvo un efecto, en el préstamo de un grupo de bancos privados norteamericanos, apoyados por su gobierno, que le permitió a la administración de Morales Bermúdez atender sus necesidades más inmediatas (Stepan 1978:287). Parece ser que, a pesar de no aprobar aún los rigurosos requerimientos del FMI, el gobierno recibió una recompensa por los cambios que empezaba a hacer.

D. ESTADO DE EMERGENCIA

En la coyuntura de julio de 1976, junto con las medidas económicas y la "limpieza" de militares reformistas, se decreta el Estado de Emergencia Nacional. Este significó la suspensión de las garantías individuales, o sea de los derechos de reunión, libre tránsito, inviolabilidad de domicilio y de la necesidad de orden judicial para detener personas. Asimismo, se agregó en este caso, significativamente, la suspensión del derecho de huelga y la clausura de todas las revistas independientes. Por último, para facilitar la aplicación del Estado de Emergencia, se decreta el Toque de Queda nocturno en la ciudad de Lima. Estas medidas represivas terminan con las ambigüedades que se habían manifestado en los primeros meses del gobierno de Morales Bermúdez frente a la movilización social, se la califica de subversiva y se procede a reprimirla.

El Estado de Emergencia es un momento del período de transición en que el gobierno militar, más allá de su carácter autoritario desde la inauguración en 1968, es visto como dictadura por el conjunto de los sectores políticos y sociales. El velasquismo era percibido como dictadura por los sectores conservadores y los grupos de izquierda radical. El gobierno de Morales Bermúdez, en cambio, luego de un primer momen-

to radical y a pesar de sus sucesivos intentos de apertura hacia la derecha, es visto por un espectro mayor de actores como un gobierno dictatorial, percepción que se acentúa con el Estado de Emergencia, cuyas medidas represivas, a pesar de estar dirigidas centralmente a detener la movilización social, afectan, en diferentes grados, a todos los sectores. Esta percepción del gobierno como dictadura por un amplio espectro de actores sociales y políticos llevará a un punto muy bajo la legitimidad de los militares para permanecer en la administración del Estado, profundizando su aislamiento de la población. Esta situación hará difícil a las Fuerzas Armadas combinar represión y liberalización y a la vez ganar credibilidad y nuevos interlocutores.

Destaca en esta actitud represiva la política del Ministro del Interior General Cisneros. En el mes de agosto dicho Ministro señala que se ha iniciado una investigación en los centros laborales para establecer la "infiltración de ultraizquierda" en los mismos, la que parece que fue exitosa ya que tal como nos dijera el propio Cisneros:

"...teníamos buena información, porque habíamos podido conseguir infiltración en todo el aparato sindical, podría haber algo de exageración para motivar, pero siempre teníamos un sustento de veracidad."

Asimismo, en el mes de octubre el Ministerio del Interior denuncia el descubrimiento de un grupo armado de ultraizquierda, denominado "Ejército Popular Peruano", sin embargo, no se conocen acciones de tal agrupación y no se presentan evidencias posteriores.

En esta misma dinámica, se procede a devolver a la empresa privada la flota pesquera que había sido estatizada por Velasco. Asimismo, en el mes de noviembre, en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) que reúne anualmente a los empresarios, Morales Bermúdez elogia el rol positivo que juega la propiedad privada y la inversión extranjera en el desarrollo nacional, a la par que anuncia la modificatoria en la ley de Comunidad Laboral, recortando el acceso de los trabajadores a la propiedad y la gestión de las empresas, con lo que se accede a un reclamo fundamental de los empresarios.

El Estado de Emergencia, sin embargo, tiene un efecto significativo en la movilización social y en particular en el movimiento sindical. Gran parte del proletariado industrial que se había destacado en su reclamo laboral durante el velasquismo simplemente suspende su actividad gremial. Las horas-hombre perdidas por huelgas se reducen (en miles) de 20,269 en 1975 a 6,822 en 1976 y 4,648 en 1977 (Webb y Fernández Baca 1990:219). Las luchas que persisten se dan en forma dispersa y aún las huelgas de gremios grandes y con dimensión nacional, como es el caso de la huelga de la Federación de Pescadores, contra la devolución de la flota a manos privadas, no alcanzan sus objetivos.

Estas medidas, sin embargo, significan una pérdida de apoyo para el gobierno por parte de quienes habían sido firmes soportes. La CNA, central campesina con implantación nacional, creada por Velasco pero que mantiene su apoyo a Morales Bermúdez, señala que "la revolución está retrocediendo" (Pease y Filomeno 1977a:2152). CONACI, que agrupaba las experiencias de co-gestión empresarial, rechaza las modificaciones que propone Morales Bermúdez a la ley de Comunidad Laboral y llama a formar un "frente popular" que defienda las conquistas laborales. Y el Partido Comunista, el grupo de mayor influencia sindical, que había apoyado a Velasco e intentado conciliar con Morales Bermúdez, emite también un pronunciamiento crítico al gobierno en diciembre de 1976.

En el caso del PC, se trata del primer pronunciamiento, desde que apoyan las reformas de Velasco luego de una breve oposición al golpe, en que señala críticas de fondo a la actuación militar, aunque todavía sin procesar una ruptura tajante. Recién en marzo de 1978, se puede observar en su semanario "Unidad" una actitud de clara oposición, en la que se pierden las esperanzas de una vuelta al velasquismo por parte de los militares. Gustavo Espinoza, dirigente comunista durante todo el período, refiriéndose a esta situación en entrevista que nos brindara, dirá: "En el Partido Comunista no nos dimos cuenta de cuando empezó ni de cuando terminó el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada".

Asimismo, la izquierda radical, también afectada por la represión que desata el Estado de Emergencia endurece su posición frente al gobierno. Esta tendencia desarrolla planteamientos sobre una "tercera fase" militar,

de carácter fascista, a la que estaría yendo el régimen, lo que abría en el país una situación de naturaleza pre-revolucionaria o revolucionaria, según los matices de cada tendencia, por lo que no quedaba otro camino, según estos sectores, que prepararse para una gran confrontación con el gobierno. En este sentido inician coordinaciones, desde julio de 1976, para la convocatoria a un paro nacional. Sin embargo, la fuerza represiva del gobierno y las dudas del PC, indispensable en cualquier medida de este tipo, sobre la necesidad de pasar a una oposición frontal, postergan por el momento la posibilidad de un paro nacional.

En medio del rigor de la contrarreforma el gobierno avanza con dificultad en el proceso de liberalización política. En agosto, Morales Bermúdez decide dejar de lado la caracterización "socialista" del proceso porque señala que se presta a confusiones. Cisneros, sin embargo, dice que ese abandono le es impuesto por la Junta Revolucionaria, que con su nueva composición, luego del relevo de Fernández Maldonado, tenía una correlación claramente derechista. De igual forma, en el mes de setiembre, Morales Bermúdez, en declaraciones al diario francés *Le Monde*, señala que el gobierno preconiza el pluralismo político, aceptando tanto organizaciones sociales como partidos políticos de diferentes tendencias. Esto último significa un alejamiento de las pretensiones reformistas sobre la necesidad de un "partido de la revolución", o de la exclusión, al menos en el discurso, de quienes no estuvieran de acuerdo con el gobierno.

Hacia fin del año 1976, sin embargo, continúan las cavilaciones en el gobierno sobre la salida política y ello se refleja en acciones y discursos contradictorios. Mientras que el abandono del reformismo y la represión a la movilización social parecen definidas, así como la necesidad de buscar nuevos interlocutores en los gremios empresariales y los partidos tradicionales para una salida política, las propuestas para atraerlos no están claras. Diferentes posiciones están en juego. Primero, los que desean un regreso simple y llano al viejo orden, agrupados principalmente en la Marina, cuya preocupación central parece ser la restauración de las jerarquías étnico-sociales (Franco 1986:399) afectadas por el velasquismo. Segundo, aquellos cuya preocupación central es "el conflicto social manejado por el comunismo", como dice Cisneros, y estarían tentados por la prolongación del régimen autoritario. Y, por

último, los que aceptan, e incluso prefieren, la derrota del velasquismo, pero aún desean permear la salida política de algunos remanentes reformistas. Es difícil establecer tendencias claras o grupos definidos, mucho más que en el caso de la crisis del velasquismo y los elementos tienden a combinarse, buscando avanzar en torno a consensos. Morales Bermúdez maneja con habilidad la baraja y no parece haber tenido, más allá de sus ambiciones personales, una posición premeditada. En conferencia de prensa en el mes de diciembre (Pease y Filomeno 1977a:2343) se refiere ya explícitamente a la transición, aunque señala:

“...no significa que al hablar de elecciones estamos hablando de las elecciones tradicionales en el Perú porque esas elecciones todos somos conscientes que no han dado resultados.”

Sin embargo, se acepta no sólo la salida política, sino el carácter electoral de la misma, y la necesidad del período de transición respectivo. Dos meses más tarde, en febrero de 1977, al publicar el proyecto de plan de gobierno, conocido como “Plan Túpac Amaru”, se incluye en este el consenso institucional alcanzado en torno a las elecciones y se agrega la necesidad de una nueva Constitución. Pero la persistencia de la distinción entre “elecciones” y “elecciones tradicionales” así como la inclusión de fórmulas como la “democracia social de participación plena” reflejaban todavía tensiones en el equipo gobernante. A estas alturas, con los velasquistas fuera del gobierno, difícilmente se podría hablar de discrepancias ideológicas de fondo, sino más bien de la influencia que la Fuerza Armada tendría en un futuro ordenamiento político, para lo cual la recuperación de algunas de las reformas y la distinción, por esta vía, del viejo orden oligárquico, era útil e importante.

Continuando con los esfuerzos de liberalización, en diciembre de 1976, se cortan los juicios a los ex-ministros del primer gobierno de Belaúnde que el velasquismo había perseguido. Se autoriza también la circulación de algunas de las revistas clausuradas, escogiéndose a los órganos de derecha y al semanario del Partido Comunista. Se dejan fuera las publicaciones de la izquierda radical y las relacionadas, directa o indirectamente con militares velasquistas. Las revistas aparecen en base a un “pacto de caballeros” entre el gobierno, representado por su

Ministro del Interior, el General Cisneros, y los directores de las publicaciones. Los puntos de compromiso de parte de estos últimos son: no atizar la lucha de clases, no apoyar la subversión ni attentar contra la unidad de las Fuerzas Armadas. Parece ser que este espectro de posiciones, que va de los partidos tradicionales al PC, es el conjunto de partidos con que los militares desearían tratar, ya que es con ellos con quienes buscan mantener contactos y eventualmente iniciar diálogos más formales. Los partidos tradicionales por la vía de contrarreforma que se estaba cursando y el PC, por su importante influencia sindical. Sin embargo, algunas semanas más tarde se deporta a los militares velasquistas en retiro que forman un partido político, el Partido Socialista Revolucionario (PSR), aunque parece ser que en esta deportación más pesa el temor a la influencia que este partido pudiera tener dentro de la propia Fuerza Armada que un intento de detener la liberalización.

Pero los partidos tradicionales y los gremios empresariales, conscientes de la necesidad que tiene el gobierno de nuevos interlocutores, exigen una mayor claridad de intenciones, en particular respecto de la forma y el cronograma de la salida política. A mediados de marzo, Acción Popular, el APRA, el Partido Popular Cristiano (PPC), exactamente los partidos dominantes del régimen anterior a 1968, realizan una reunión de coordinación con intenciones de formar un "frente cívico", pero sin llegar a conciliar sus puntos de vista. Recién en mayo, con la convocatoria por el gobierno a un diálogo individual con los partidos se hacen claras las diversas posiciones. El gobierno militar reconoce como interlocutores a determinadas fuerzas políticas, AP, el APRA y el PPC, los más importantes entre los grupos del viejo orden y al PC, como único representante de la izquierda. Quedaron excluidos el PSR, por la amenaza que a ojos militares implicaba y los partidos de la izquierda radical, que al plantear directamente el derrocamiento armado del régimen quedaban también descalificados. Las posibilidades de un pacto quedaban así abiertas, aunque, como veremos, todavía había camino por recorrer.

Los diálogos entre militares y partidos proceden de la siguiente manera. AP, en accidentada reunión, propone elecciones generales al año siguiente, con la legislación previa a 1968, o sea, el retorno simple y llano de los militares a los cuarteles, sin tomar en cuenta los cambios

ocurridos. El PPC, elecciones legislativas para 1978 y presidenciales para 1980. El APRA, en cambio, buscando coincidencias con los militares, plantea elecciones municipales a fines de 1977, constituyentes para 1978 y generales (parlamentarias y presidenciales) para 1980. El PC señala que el objetivo debe ser "profundizar la revolución", pero ante la inminencia de una salida electoral, dice que esta debe servir para institucionalizar las reformas y se limita a pedir la extensión del derecho al voto, incluyendo a los analfabetos y los mayores de 18 años. La posición tajante, de un retiro militar casi inmediato, descarta a AP de un posible pacto, y el PC, colocándose en el otro extremo del espectro, al defender una posición extemporánea, ve también limitada sus posibilidades de entrar en tratos más específicos con los militares. Así, quedan el PPC y el APRA con posiciones más flexibles que los irían perfilando como los interlocutores preferenciales.

El gobierno militar, sin embargo, no adopta ninguna actitud inmediata frente a los planteamientos de los partidos, delegándose a distintos jefes militares que mantuvieran el contacto iniciado y más bien debe atender la grave situación económica que se manifiesta en el mismo mes de mayo. Los resultados de estas conversaciones recién se verán en la respuesta militar a la coyuntura abierta por la recurrente crisis económica.

A EL FIN DE JULIO

A fines de mayo de 1977 el gobierno militar parece decidido a enfrentar el problema de la reducción del gasto público, buscando cumplir de esta forma con los requerimientos del FMI para acceder a nuevos créditos. Para ello designa como nuevo Ministro de Hacienda a un economista, Walter Cervera, que se había caracterizado por su clara oposición al velasquista. El cambio busca en mostrar la voluntad militar de llegar

La Apertura Política

ESTE ES EL MOMENTO EN QUE SE DEFINE la transición, es decir la salida democrática y la vuelta de los militares a sus cuarteles. La movilización social es finalmente derrotada pero no solo con represión sino también con democratización. Es decir, se convocan a elecciones, se señalan nuevas reglas de juego y se logra una alianza que asegura la salida política. Esta democratización tiene varios significados. Por una parte, responde al ánimo anti-dictatorial de toda la sociedad, que es unánime luego de un año de Estado de Emergencia: ¡abajo la dictadura! dice la izquierda y ¡que se vayan los militares! proclama la derecha. Por otra, el camino de salida no es el mismo para todos y algunos no saben lo que quieren. Aquí es donde se impone el "retiro ordenado" que pacta Morales Bermúdez con los partidos tradicionales, desechando definitivamente la "democracia social de participación plena" que levantara el velasquismo, así como evitando cualquier proyección política que pudieran tener las demandas del movimiento social que enarbola la izquierda.

A. EL 19 DE JULIO

A fines de mayo de 1977 el gobierno militar parece decidido a enfrentar el problema de la reducción del gasto público, buscando cumplir de esta forma con los requerimientos del FMI para acceder a nuevos créditos. Para ello escoge como nuevo Ministro de Economía a un empresario: Walter Piazza, que se había caracterizado por su clara oposición al velasquismo. El cambio insistía en mostrar la voluntad militar de llegar

a un pacto con el sector empresarial y la derecha política, entregándoles directamente el manejo de la economía. Piazza diseña un programa que recorta drásticamente el gasto público, afectando los gastos y servicios del Estado y, sobre todo, elevando el precio de la gasolina (monopolio estatal) por lo tanto, del transporte en general y de los pasajes urbanos en particular. El fenómeno es expresado en forma inmejorable por el titular del periódico comunista "Unidad", en los días siguientes al anuncio oficial de las medidas por el nuevo ministro: "Piazza: habló el patrón".

Las medidas económicas causan una inmediata respuesta en todo el país, llevando a paros sectoriales de la Federación de Empleados Bancarios, del Sindicato de Maestros (SUTEP) y de los mineros del importante asiento de Toquepala, asimismo a paros regionales en las principales ciudades del sur andino: Cusco, Puno y Arequipa, y movilizaciones en Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Destaca el paro habido en la ciudad del Cusco, donde se repiten las movilizaciones a lo largo de todo el mes de junio (Valladares 1987:5-15). El 6 de julio, un mes después de anunciadas las medidas económicas, renuncia el Ministro Piazza, siendo reemplazado por un general señalado por su docilidad frente al comando. Dos factores contribuyen al cambio de Ministro: por una parte la resistencia de los militares para proceder a recortes efectivos en el gasto público, en particular en defensa, por otra, la respuesta popular. El PC y el PSR saludan el desplazamiento de Piazza y señalan que se trata de una derrota a la política económica del gobierno. Sin embargo, esta renuncia no se traduce en concesiones sustantivas a la movilización social, por lo que continúan los preparativos para un paro nacional. Finalmente el 14 de julio, una amplia gama de 23 organizaciones sindicales, agrupadas en un Comando Unitario de Lucha (CUL), que incluye a organismos influidos por el PC, la izquierda radical, sectores del velasquismo e independientes, convoca a un paro nacional de 24 horas para el día 19.

Esta convocatoria conjunta rompe una larga resistencia del Partido Comunista a convocar un paro nacional y, a la vez, plasma una acción por la que los radicales habían estado luchando, por lo menos, desde un año atrás. Sin embargo, este frente único izquierdista no es del todo sólido. El PC, por diferencias internas, tal como nos señalan Eduardo

Castillo y Gustavo Espinoza, recién se suma a última hora, luego de que intentara considerar la salida de Piazza como reivindicación suficiente. Asimismo, algunos de los sectores más radicales de la izquierda, principalmente maoístas ortodoxos, se resisten todavía a juntarse con el PC y deciden no apoyar el paro, influyendo más bien para que los sindicatos mineros del centro realicen su propia huelga una semana más tarde. La Nueva Izquierda, por su parte, que persistentemente había presionado por la medida, emite por primera vez un comunicado público conjunto, que firman cinco grupos (Vanguardia Revolucionaria, Partido Comunista Revolucionario, Movimiento de Izquierda Revolucionaria-4ta. etapa, Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Voz Rebelde y Movimiento de Acción Proletaria). Allí, denuncian al gobierno como "dictadura pro-imperialista y anti-popular", al "carnaval electoral" que pretende organizar y llama a apoyar al paro y a estar alertas frente a un posible sabotaje del PC.

El comunicado del CUL que firman las organizaciones sociales convocantes (Pease y Filomeno 1979:2667-2668) contiene los siguientes puntos reivindicativos:

1. Por un aumento general de sueldos y salarios de acuerdo con el alza del costo de vida y contra el Programa de Emergencia de Piazza.
2. Por el congelamiento de los precios de los artículos de primera necesidad.
3. Por la vigencia de los Pliegos Anuales sin topes ni recortes.
4. Por la plena vigencia de la estabilidad laboral (Derogatoria del D.S. 011-78).
5. Por la reposición de todos los trabajadores despedidos. Libertad de los detenidos y repatriación de los deportados por razón de sus luchas sindicales y sociales.
6. Por la vigencia irrestricta de las libertades democráticas (levantamiento de la Ley de Emergencia, Toque de Queda, libertad del derecho de huelga, de reunión, de prensa, libertad de organización, expresión y movilización. No a la intervención de los organismos representativos de los trabajadores).
7. Solución a la crítica situación que atraviesan los trabajadores del mar.
8. Por la no intervención en las empresas campesinas y la supresión de la deuda agraria.
9. Por la no intervención en las universidades."

La plataforma de lucha expresa el carácter del paro: una medida defensiva. Su propósito era la recuperación del poder adquisitivo del salario, dañado a partir de 1974, así como la restauración de las condiciones de trabajo, garantizadas por el velasquismo. No se va más allá en la defensa de las reformas ni menos de su proyecto político, tampoco se plantea salida política alguna, ni alternativa frente a los proyectos electorales del gobierno. La única mención a la democracia, en el punto sexto, se refiere a las "libertades democráticas", tal cual el movimiento social se había referido a ellas durante todo el gobierno militar, como libertades individuales y sociales que permitían ejercer la actividad sindical. Remarcamos esta particularidad porque en algunas evaluaciones posteriores a los sucesos (Pease 1988:27) se cree encontrar en los reclamos laborales una demanda electoral, lo que hubiera sido, sin duda, rechazado por la dirigencia de la época. Este carácter defensivo y de reivindicación económica, no le quita significado a la medida de lucha, pero sí señala la perspectiva del movimiento, limitado a responder a las agresiones inmediatas de las que venía siendo objeto. Esto, sin embargo, no recorta el ánimo anti-dictatorial del reclamo obrero, que veía en los militares a los culpables de sus padecimientos y prefería su recambio, aunque sin encontrar una vía, más allá del discurso revolucionario de las organizaciones que lo influían, para que esto ocurriera.

El paro es denunciado por el gobierno así como por algunos órganos de derecha como una medida subversiva. El Ministerio del Interior instruye a los diarios "que se abstengan de publicar informaciones que atenten contra la Unidad Nacional o fomenten la subversión" (Pease y Filomeno 1979:2674) y la revista "El Tiempo", en su número previo a la huelga señala: "Mañana es el martes rojo". Los partidos tradicionales, conscientes del masivo respaldo de la medida de lucha se abstienen de comentarios anteriores. Luego de realizado, el APRA califica el paro de "comunista" (Lynch 1980:215). Sin embargo, la medida tiene gran acogida, tanto en Lima, como en las ciudades del interior. Los sectores más importantes que lo acatan, como señala Manuel Valladares (1987) son urbanos y obreros y suman aproximadamente 270,000 trabajadores (Sulmont 1980:204-205). En Lima, en particular, el paro adquiere gran intensidad, multiplicándose las acciones conjuntas de trabajadores y pobladores que en los barrios populares enfrentan a la policía, desarrollando una gran jornada de lucha popular urbana.

El gobierno responde con dos medidas de capital importancia. El día 21 de julio autoriza a las empresas públicas y privadas a despedir a los dirigentes sindicales que hayan participado en el paro. En las siguientes semanas son despedidos aproximadamente 5,000 dirigentes en todo el país (Balbi 1989:113), en lo que constituye el golpe más importante a la movilización social en todo el período de transición. Eduardo Castillo, entonces Secretario General de la CGTP y que no había estado entre los más entusiastas para convocar el paro del 19 de julio, señala: "ningún dirigente preveyó las gravísimas consecuencias que en términos de despidos iba a tener el paro". Asimismo, el día 28 de julio, anuncia que próximamente se convocará a elecciones para una Asamblea Constituyente, a ser instalada al año siguiente, "con la misión exclusiva de elaborar la nueva Constitución, una carta que asegure la continuación del proceso revolucionario; la conciliación de las transformaciones estructurales con las libertades y las garantías democráticas" (Pease y Filomeno 1979:2687). Señala también que la Constitución deberá estar lista en un plazo suficiente para que en 1980 se lleven adelante elecciones generales. Ambos anuncios, de represión y apertura política respectivamente, que se producen como respuesta inmediata al paro, tendrán tales repercusiones que señalarán al 19 de julio como un punto de viraje fundamental en el período. El primero descabeza al movimiento popular impidiéndole volver a tener la fuerza sindical y política desplegada el 19 de julio, el segundo permite al gobierno pasar a la ofensiva, señalando plazos electorales, asegurando a sus interlocutores de centro y derecha y sentando las bases para negociar los detalles de la transferencia. El paro nacional no logra ninguna de sus reivindicaciones explícitas, pero termina de convencer a las Fuerzas Armadas de la necesidad de regresar a sus cuarteles, por lo menos, para que su grado de aislamiento no alcance un deterioro irreversible.

Luego del paro del 19 de julio la movilización social se ve seriamente limitada por los despidos producidos y la aparición de una "escena electoral" ante el anuncio hecho por el gobierno. Al mismo tiempo las pugnas entre los partidos de izquierda, particularmente entre el PC y la izquierda radical, sobre cómo enfrentar el problema de los despidos, se hacen más agudas. Algunos sindicatos influidos por sectores radicales intentan llevar adelante un nuevo paro nacional el día 20 de setiembre, pero este fracasa porque no cuenta con el apoyo de la CGTP. Estas

pugnas, entre el PC y la izquierda radical, continuarían llevando en enero a un nuevo paro frustrado y recién en febrero de 1978 a un paro nacional efectivo que tiene poco apoyo y tampoco consigue sus objetivos. La movilización social, sin embargo, reflejando espontaneidad de los actores y la gran heterogeneidad de la estructura social, tiene dinámicas diversas. Entre julio y febrero se dan paros y movilizaciones importantes, entre los que destacan los llevados adelante por el Frente Regional del Cusco (Comité Coordinador de Organizaciones Populares-COCOP) y el Sindicato de trabajadores siderúrgicos de la empresa estatal Sider-Perú, en Chimbote, ambos enarbolando reivindicaciones económicas y regionales y teniendo su movilización gran impacto regional (ver parte III). La diversidad que presenta este cuadro da lugar por ello a distintas interpretaciones. El PC, que deseaba influir la salida electoral manteniendo la mayor cantidad posible de reformas y no quería perder su calidad de interlocutor con el gobierno, intentaba un acercamiento cauteloso a la situación y no favorecía medidas extremas, en particular, cuando se intentaba poner al frente a la CGTP. La izquierda radical, que consideraba la convocatoria del gobierno "una farsa electoral", porque, como señala nuestro entrevistado, Manuel Dammert: "Nadie (en esa tendencia) apostaba a las elecciones, incluso después de que estas hubieron ocurrido", urgía medidas de confrontación que llevaran "a un desenlace popular de la situación revolucionaria". Esta rivalidad se juntaba con las debilidades del propio movimiento y la nueva situación electoral para disminuir las posibilidades de la lucha social.

Ambas tendencias, sin embargo, se movían en un escenario de perdedores. Habían tenido fuerza para producir una unidad eventual, en el paro del 19 de julio, logrando efectos políticos aunque no sus reivindicaciones gremiales. Pero no habían sido capaces de responder al contra-ataque del gobierno, tanto a nivel sindical, en el despido de la dirigencia, como a nivel político, en la convocatoria electoral, ya que estaban más preocupados de cuidar las reformas, el PC, o de "hacer la revolución", los radicales. Su triunfo, al lograr el paro, lo usufructúan otros y su insistencia en privilegiar la movilización social, hasta en el momento electoral mismo como veremos más adelante, los saca de juego. En ningún caso, ni el PC, ni la izquierda radical, pero sobre todo esta última, toman verdadera conciencia de la situación de la movilización

social, gravemente debilitada por el Estado de Emergencia, ni tampoco del carácter defensivo del paro del 19 de julio y del posterior descabezamiento de la dirigencia. La magnitud inédita del paro no deja ver sus limitaciones y hace creer a la izquierda que contaba con una capacidad de movilización ofensiva que podría eventualmente arrinconar a los militares u obligarlos a retirarse en desorden. Este supuesto escenario de ofensiva popular y defensiva del gobierno es el que alimentaba las ilusiones de restauración velasquista para el PC y situación revolucionaria para los radicales. Pero tal ofensiva no existía y el escenario de la lucha social había sido reemplazado por las elecciones.

Podemos decir entonces que la definición del retiro militar sería el punto de partida para la construcción de nuevas alianzas que no incluirían a los partidos de izquierda, no solo por preferencia militar y/o derechista sino también por decisión propia. La movilización social contra la dictadura se quedaría así sin representantes políticos en el nuevo pacto democrático.

B. LA CONVOCATORIA ELECTORAL

El anuncio de elecciones para una Asamblea Constituyente, así como de plazos para la misma, significaba el primer paso inequívoco de transición. Quienes estaban más interesados en la transición democrática: los partidos tradicionales, pero que se habían negado hasta ahora a negociaciones específicas, las llevarán adelante. El PPC y el APRA aceptan la convocatoria, AP, por el contrario la rechaza. En la izquierda se producen también divisiones, el PC la acoge, siempre y cuando incluya las reformas, el PSR pide primero libertades democráticas y la izquierda radical sencillamente la denuncia como un engaño.

Al anuncio de elecciones siguen entre agosto y noviembre un conjunto de medidas que buscan efectivizar la convocatoria y dar curso al escenario electoral. A fines de agosto se produce el cese del Estado de Emergencia, impuesto trece meses antes, en julio de 1976. En setiembre se da la autorización para la reapertura de las revistas de izquierda

clausuradas, también con motivo del Estado de Emergencia, siempre y cuando acepten la censura previa. En octubre se publica el decreto-ley que oficialmente convoca a las elecciones para el cuatro de junio de 1978. En noviembre el decreto-ley de elecciones que da el derecho al voto a los peruanos alfabetos, mayores de 18 años y permite la participación tanto de los partidos políticos como de las organizaciones gremiales en las mismas. Asimismo, se termina con la censura previa de las publicaciones independientes, que había estado en efecto desde diciembre de 1976, luego de la clausura con motivo del Estado de Emergencia. Queda en vigencia también, como instancia máxima para supervigilar el proceso, el Jurado Nacional de Elecciones que actuó en los últimos comicios habidos en el país antes de 1968. Por último, y como corolario de todas estas medidas, se disuelve oficialmente el SINAMOS, muy venido a menos desde la caída de Velasco, pero que persistía como recuerdo de lo que habían sido las políticas de "movilización social" del velasquismo y su proyecto de "democracia social de participación plena".

La definición de este conjunto de reglas de juego va a derrotar, en primera instancia a quienes dentro del propio régimen militar no estaban de acuerdo con elecciones para una Asamblea Constituyente, ni con entregar el poder en 1980. Estos sectores, que estaban encabezados por el General Luis Cisneros, proponían una "tercera fase" de "gobierno civil-militar", donde una comisión de expertos elaborara una nueva Constitución y esta se sometiera posteriormente a referéndum. La preocupación por la persistencia de la movilización social parece ser el elemento central que animaba a esta tendencia. Así nos dice el propio Cisneros:

"Yo me opongo a la transferencia y me opongo por razones totalmente políticas. Consideraba que era indispensable una tercera fase pero de un gobierno civil-militar. Un gobierno militar con participación de los civiles en todos los sectores productivos para ir abriendo las compuertas de la democracia y poder entregar un país canalizado ya. Mi tesis era que si nosotros entregábamos el poder se iba a abrir la puerta a borbotones y después de doce años el agua iba a salir a raudales y no hemos hecho nada. En doce años de orden impuesto íbamos a dejar un desbarajuste político y un desbarajuste económico".

Señala asimismo que se forma tal comisión y se elabora un proyecto de Constitución, manteniéndose durante algún tiempo esa como una de las alternativas posibles. Sin embargo, el General Morales Bermúdez, que, según Cisneros, "ahí aprendió política", finalmente desecha su propuesta. El debilitamiento de la posición del Ministro del Interior estaría dada, además, por el retiro, por antigüedad, de la jefatura del Ejército y de su puesto de Primer Ministro, del General Guillermo Arbulú, estrecho aliado de Cisneros desde los momentos de la conspiración para cambiar a Velasco. Su reemplazo por el General Oscar Molina, oficial ligado en un momento al velasquismo, inclinaría la balanza hacia la salida electoral y la persistencia de la retórica reformista. Parece ser, incluso, que llega a haber un conato de golpe en apoyo a la propuesta de Cisneros, cuando un grupo de generales de las diferentes instituciones armadas, entre fines de 1977 y principios de 1978, contempla la posibilidad de llevar adelante un golpe, con el liderazgo de Cisneros, acción que este último rechaza encabezar.

Pero la definición de reglas de juego significará también un importante debate entre los partidos políticos. Por una parte están los que rechazan las elecciones, aunque por razones opuestas. Acción Popular, que plantea el regreso simple y llano al viejo orden, combina el deseo revanchista del partido desplazado por el golpe militar de 1968 con el afán restaurador de los conservadores, pero también incluye, de esta forma, un astuto cálculo político al buscar concentrar todo el sentimiento anti-dictatorial del pueblo. De allí, su rechazo total a los calendarios militares y su pedido de elecciones inmediatas. La izquierda radical, que globalmente rechaza la convocatoria, persistiendo en impulsar la movilización social y nuevos paros sectoriales y nacionales. Pero sus motivos son "revolucionarios", es decir no cree en la salida electoral como solución democrática y proclama vivir un período de preparación para el asalto al poder. No entra, por ello, en el debate propiamente electoral y se limita a denunciar las elecciones como una "maniobra" que pretende distraer a las masas de sus "objetivos históricos". Sin embargo, a la hora de decidir su participación electoral opta por caminos distintos. Patria Roja, grupo maoísta ortodoxo, decide por la no participación. En el número 23 (1978) de su periódico "Patria Roja" señala: "Las masas rechazan el circo electoral". Asimismo los sindicatos mineros del centro, en comunicado de diciembre de 1977, reproducen el lema de un último congreso para

manifestar su rechazo: "Contra la Constituyente y las elecciones contribuir a forjar la alianza obrero-campesina en el camino del campo a la ciudad para instaurar la dictadura democrático-popular". En cambio, la denominada Nueva Izquierda, se agrupa en la Unidad Democrático Popular (UDP) y decide su participación para "usar la tribuna electoral" en función de sus objetivos revolucionarios. Asimismo, un grupo de asesores y líderes sindicales, junto con tres partidos troskistas, forman el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP), que decide participar con la misma perspectiva utilitaria.

Por otra parte, los que aceptan el juego electoral y por lo tanto pasan a discutir sus reglas. Aquí el debate se da en torno a tres puntos: el voto de los analfabetos, la necesaria inclusión de las reformas en la futura Constitución y la representación de las organizaciones sociales en la Asamblea Constituyente.

Sobre el voto de los analfabetos, cuya cifra se elevaba al 17% de la población en 1981 (Consejo Nacional de Población 1984:99), los militares optan por el criterio que había seguido la legislación electoral anterior a 1968, negándoles esa posibilidad. Pease (1981:264) calcula que dos millones de personas no tuvieron derecho al voto por esa razón. Quizás aquí haya jugado el temor a las tendencias izquierdistas que pudiera mostrar el campesinado, donde se encontraba la mayoría de la población iletrada, a consecuencia del proselitismo desarrollado durante la Reforma Agraria. Tanto el PC como el PSR en sus pronunciamientos sobre las elecciones, así como la Iglesia Católica, hacen defensa expresa del voto analfabeto, mientras que los partidos de derecha, AP y el PPC evitan pronunciarse y luego de alguna presión, el APRA, recién en diciembre de 1977, se suma al pedido del mismo derecho. El gobierno no cambia su punto de vista, según el General Morales Bermúdez porque un cambio de esa trascendencia debería dejarse a la Asamblea Constituyente. El caso es que con su decisión restringe el electorado en una forma que favorece a los partidos tradicionales y niega un derecho fundamental a la población rural que había sido objetivo privilegiado de las reformas.

El tema de la inclusión de las reformas en la Constitución tenía que ver más con la retórica del discurso militar, que buscaba una continuidad simbólica entre los dos períodos de gobierno castrense, que con lo que

sucedía en la realidad. Luego de dos años de contrarreforma y de la búsqueda de nuevos interlocutores sociales y políticos en las clases dominantes, el tema aparecía más como una forma de justificar su permanencia en el poder desde 1968 y su futura influencia en los asuntos estatales, que como una preocupación por las reformas mismas. Lo primero, sin embargo, no era poca cosa para las Fuerzas Armadas por lo que la polémica que se despierta es enconada. En un primer momento, el gobierno la considera en todos sus discursos oficiales, en particular, en el primer anuncio de las elecciones, en julio de 1977, como en el decreto-ley de convocatoria oficial, en octubre del mismo año. El asunto es particularmente resaltado por el PC, que también lo menciona en todos sus comentarios electorales, e incluso, le pide al gobierno que sea más explícito, para que los demás participantes en la contienda no puedan evadirse de tomarlo en consideración. La derecha, sin embargo, reacciona airada, señalando que tal requerimiento lesionaría la soberanía del organismo elegido y hace cuestión de estado al respecto. En el extremo esta posición lleva al ya señalado retiro de AP. El PPC, en cambio, manteniendo una posición similar, continúa buscando el camino del acuerdo con los militares. El APRA, a diferencia de los otros dos partidos tradicionales, ya había manifestado desde un principio su voluntad de considerar las reformas, posición que junto con sus coincidencias en cuanto a calendario electoral, la llevan, cada vez más, a ser interlocutor privilegiado del gobierno. Tal intensidad alcanza, sin embargo, el debate, que hacia fines de 1977, el General Morales Bermúdez señala:

"Suponga usted que la Constituyente no reafirma las reformas estructurales. ¿Qué dice el decreto-ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente? Dice que se convoca a la Asamblea y en uno de los considerandos dice para que incorpore las reformas. Entonces, el Gobierno de facto, que es este Gobierno, anula pues la Asamblea y se acabó la historia. Entonces, esto tiene que ser reforma o no reforma. Tiene que ser. Porque si no hay reforma se anula el proceso y sigue pues el Gobierno Militar, conmigo o con otra persona. Esa es la verdad." (Pease y Filomeno 1979:2879).

Días más tarde la Junta Revolucionaria se solidariza con estas declaraciones presidenciales. Pero la reacción de los partidos tradicionales es tajante, lo que lleva al gobierno a no insistir para no poner en peligro el

conjunto del proceso. Conforme avanzan los meses y surgen otras dificultades, principalmente en torno al conato de golpe señalado, el retiro de AP, los problemas económicos y la reacción del movimiento social, la prioridad para los militares pasa a ser efectuar las elecciones a como de lugar, manteniendo la letra del requerimiento reformista pero olvidándolo en la práctica.

En cuanto a la representación de las organizaciones sociales en la Asamblea Constituyente, este era un remanente del proyecto velasquista de "democracia social de participación plena" que señalaba la necesidad de la representación política directa de las organizaciones sociales en el Estado. Su inclusión en la convocatoria electoral estaba en línea con el tema anterior y formaba parte de la intención del gobierno de mostrar una continuidad en la labor de los militares. Sin embargo, poco tenía que hacer en las condiciones de contrarreforma y salida electoral del gobierno de Morales Bermúdez, más aún cuando organizaciones como la CNA y CONACI, que habían nacido al amparo estatal, pero alcanzado vida y arraigo propios, mostraban sus distancias con el gobierno. Era el elemento más débil de la retórica reformista presente en los decretos electorales y no fue tanto la oposición de los partidos tradicionales, como el propio gobierno que en la práctica dejó de lado esa provisión. Parece ser, según versión del General Cisneros, que la inclusión de las organizaciones sociales había sido iniciativa del General Molina y constituiría a la postre una víctima más de la rivalidad entre las tendencias que representaban ambos oficiales. La prueba vino cuando la CNA pretendió inscribirse para participar en el proceso electoral. Primero, una campaña de descrédito y denuncia promovida por el propio gobierno, en particular por el Ministro Cisneros. Luego, la negativa del Jurado Nacional de Elecciones a inscribir a tal organización. Por último, por su solidaridad con los paros nacionales, sería ilegalizada en mayo de 1978, a pocas semanas de las elecciones.

La discusión de las reglas de juego y las posiciones que finalmente se adoptan nos van a mostrar distintas concepciones de democracia e irán perfilando el carácter que va tomando la salida electoral.

La izquierda, que tenía su principal campo de acción en el movimiento social, combina varios elementos en su actitud. Primero, una profunda

carga ideológica marxista-leninista que la llevaba a despreciar las elecciones, a subrayar su carácter clasista "burgués", en algunos casos a considerarlas una trampa de los militares y en última instancia a tomarlas como un medio para conseguir futuros objetivos revolucionarios. Luego, como señalan Franco (1986:309-318) y Pease (1988:29-30), su memoria o conocimiento negativo de lo que había sido la experiencia de la democracia oligárquica. Por ello, su referencia a democracia, como hemos visto en la plataforma del paro nacional del 19 de julio, era a las "libertades democráticas" necesarias para que las organizaciones sociales ejercieran su actividad. La preocupación democrática cotidiana de la izquierda, tal como señalan, tanto Cotler (1988:168) como Nieto (1983:79-84), estaba centrada en la demanda de derechos sociales, la actitud positiva o negativa de los distintos actores frente a esta demanda los hacía "democráticos" o "anti-democráticos". Esta actitud llevaba a privilegiar los espacios donde se desarrollaban las demandas sociales, tales como el sindicato, la organización campesina o barrial, o el frente regional y considerar ajenas al pueblo las instancias de representación que se ofrecían con la salida electoral. Estos espacios "sociales" eran donde, para la izquierda, surgía la verdadera democracia, que debería tomar la forma de una democracia directa.

Con matices, por la distinta actitud frente a los gobiernos militares, esta idea de "democracia social" atravesaba tanto a la izquierda radical como al PC. En la primera, era la insistencia en la autonomía de las organizaciones sociales para desarrollar su demanda y movilización, en el segundo, a esta autonomía había que agregar los derechos que garantizaban las reformas velasquistas para que el movimiento tuviera perspectiva. Para Nieto (1983:82-83) similar motivación estaría también tras el proyecto de "democracia social de participación plena", a pesar de sus rasgos corporativos y controlistas, razón por la cual habría atraído al PC y a algunos otros sectores de izquierda. Un ejemplo interesante de cómo se plasma esta concepción izquierdista en el período es la cantidad de dirigentes populares, principalmente sindicales, que se convierten en candidatos a la Asamblea Constituyente. Eduardo Castillo declara: "Con el paro del 19 de julio muchos líderes llegamos a la Constituyente". Los diferentes partidos de izquierda, con distinta intensidad, compartían la idea de que la lucha social tenía su continuación natural en la lucha política y que los líderes de una podían fácilmente ser líderes en la otra.

Esta concepción "societal" de la política los llevaría a jugar en el terreno equivocado, permitiendo que otros se aprovechen de sus triunfos y dándoles escasa capacidad de representación en un momento en que tenían importante arraigo social.

En la derecha el afán era restaurador. Tanto el PPC como AP querían el retorno a 1968, incluso plantearon que se llamara a elecciones con la Constitución anterior, la de 1933. Cotler (1988:168) señala que "entendían la democracia como un orden que aseguraba intereses y privilegios", yo agregaría como un viejo orden que aseguraba intereses y privilegios, donde la garantía de derechos para unos implicaba la exclusión de derechos para otros. Este viejo orden tenía una traducción democrático-representativa, de características restringidas, que llamamos "democracia oligárquica" al iniciar esta segunda parte. La salida de Velasco y la contrarreforma llevada adelante por Morales Bermúdez habían significado la derrota del proyecto de "democracia social de participación plena". La contrarreforma, en particular, había cumplido el papel de reprimir la movilización y restringir los derechos sociales, especialmente laborales, a la par que garantizaba nuevamente el derecho de propiedad al empresariado, especialmente industrial, al afectar, entre otros, la estabilidad en el empleo y modificar la comunidad laboral. Esta represión creó nuevas condiciones sociales que favorecían a la derecha y la impresión en la opinión pública de que se estaba saliendo de una crisis causada por las reformas y el camino era regresar al sistema electoral de partidos. El cronograma de transferencia no pudo ser totalmente pactado porque la exigencia de un retiro inmediato de los militares atentaba contra la estabilidad institucional de las Fuerzas Armadas y ese fue quizás el desacuerdo mayor. Sin embargo, los demás asuntos contenciosos, fueron todos resueltos a favor de los sectores conservadores. No se dió el voto a los analfabetos, no se facilitó la representación de las organizaciones sociales en la Asamblea Constituyente, ni se insistió en la incorporación del conjunto de las reformas en el texto constitucional. La salida electoral resultaba así favoreciendo a la derecha, tanto por la coyuntura en que se daba, donde el gobierno prefería como interlocutores a los partidos tradicionales, como por las reglas de juego, que sin ser excluyentes, privilegiaban a unos y subordinaban a otros.

En este aspecto, quizás si el APRA sea un caso especial. Desde los primeros años del velasquismo mostró su acuerdo con la necesidad de cambios y cuando se empezó a hablar de "institucionalización de las reformas", señaló sus antiguas críticas a la democracia oligárquica y manifestó la necesidad de un nuevo régimen político (Lynch 1980). Fue el primer partido en tener contacto con Morales Bermúdez y buscó coincidir con el cronograma electoral propuesto por los militares. A su vez, estos lo consideraban el mejor heredero, dado su pasado reformista y su disponibilidad a servir de puente hacia un nuevo orden constitucional. Es difícil saber que tan cercanos fueron los contactos entre el APRA y los militares, tanto Morales Bermúdez como Cisneros, niegan que hubiera un tratamiento especial, pero la cercanía de sus posiciones permite observar un entendimiento fluido. De igual forma, su concepción de la democracia había juntado siempre elementos liberales con aspectos corporativos, e incluido un rol significativo del Estado (Haya 1970), cuestiones estas que se emparentaban con la retórica reformista y no dejaban de agrandar a los militares. Al mismo tiempo su calidad de "partido tradicional" por formar parte del juego político oligárquico entre 1956 y 1968, lo convertía también en posible "socio" de los partidos de derecha en un pacto con los militares, con lo que su importancia se acrecentaba. Estas múltiples características le darían apreciables ventajas en el período de transición.

Tal como señala Nieto (1983:52) luego de la convocatoria a elecciones se dejaría de hablar de "transferencia del poder al pueblo organizado" para pasar a referirse, en el discurso militar, a la "transferencia del poder a la civilidad". Este cambio va a expresar el nuevo destinatario político que define el gobierno de Morales Bermúdez, ya no será el "pueblo organizado" del proyecto velasquista, donde se reivindicaba, al menos en el discurso, a los sectores excluidos por el orden oligárquico, pero dejando de lado a los partidos tradicionales, sino "la civilidad" que debiera aludir a todos los peruanos no militares. Sacando ambas referencias de contexto podemos concluir que una es excluyente y la otra inclusiva, hasta pluralista, en un sentido liberal (Cotler 1986,1988), donde todos estarían llamados a formar una nueva comunidad política. Sin embargo, el término "civiles" es usado por los dirigentes de los partidos tradicionales para referirse a si mismos, como los únicos que habían estado permitidos de hacer política en el Perú anterior a 1968. Por

lo tanto, "transferir el poder a la civilidad" no tiene necesariamente un contenido pluralista, sino más bien ambiguo y con cierta carga restauradora, lo que se puede observar en las nuevas preferencias que desarrolla el gobierno militar.

C. ¿ACTO ELECTORAL O ACTO DE MASAS?

Fijar las reglas de juego no termina, sin embargo, con los problemas. Entre marzo y junio de 1978 la transición tendrá que enfrentar todavía varios desafíos. La crisis económica, que los militares se niegan a encarar en forma tajante, sigue vigente. La movilización social, a pesar de su dispersión, continúa como una amenaza. El temor a las masas alimenta una crisis en las alturas, que enfrenta distintas posiciones en las Fuerzas Armadas respecto de la salida política. Por último, el retiro de Acción Popular agrega desconfianza frente al proceso electoral.

En marzo, Fernando Belaúnde, líder de AP, envía una carta al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, eludiendo al Presidente Morales Bermúdez y su gabinete ministerial, en la que pide garantías de no intervención castrense en el proceso electoral. La descortesía raya en provocación y al no obtener respuesta oficial su partido anuncia el retiro de la contienda días más tarde. A estos hechos, que por la importancia de AP, quitaban legitimidad a la salida electoral, se suman las discrepancias entre los militares. El Ministro del Interior, General Cisneros, venía aconsejando una mano más dura para con la movilización social, así como la abstención del diálogo y las concesiones; el Presidente Morales Bermúdez, trataba en cambio, de recibir selectivamente a los dirigentes sindicales y prometerles la solución de algunas demandas. El conflicto se hace particularmente agudo respecto de los despedidos por el paro del 19 de julio, llevando, a mediados del mismo marzo, a la reposición de 78 trabajadores que se encontraban en huelga de hambre. En esta coyuntura Cisneros dirá que existen "posiciones discrepantes que pueden parecer insalvables" (Pease y Filomeno 1980:2997) reconociendo la gravedad de la contradicción y algunos días más tarde señala que de persistir el clima de agitación el proceso electoral tendría que ser postergado. A su criterio, según nos dirá, Morales Bermúdez quería aparecer a veces "más como presidente democrático que como presidente

de facto", mientras que él se consideraba "un ministro de facto que preconizaba soluciones de facto".

Las posiciones del Ministro del Interior tienen eco en la revista derechista *El Tiempo*, que titula: "La Constituyente oculta la crisis y empuja al caos" y en la Sociedad Nacional de Industrias, que plantea un "Gobierno cívico-militar", mientras que la prensa izquierdista hace campaña por la renuncia de dicho ministro. El malestar se deja sentir en las Fuerzas Armadas y hay nuevamente rumores de que un grupo de oficiales habría pedido apoyo a la embajada de los Estados Unidos para un golpe de estado, sin resultados, por la política del entonces presidente Carter. Finalmente aparece, a fines de marzo, en una forma considerada inusual, un comunicado de los Comandantes Generales de cada arma, advirtiendo sobre las "actitudes desestabilizadoras" de la prensa independiente, que atentan contra "el proceso de transferencia política" (Pease y Filomeno 1980:3008). Sin embargo, parece que luego de haber sido desechada la alternativa del General Cisneros sobre una "tercera fase", a fines de 1977, sus apoyos militares eran escasos y su suerte ya estaba decidida, concretando su renuncia a principios de mayo y su envío como agregado militar a Francia.

La crisis económica, por otra parte, no cesaba de agravarse, debido sobre todo a la recurrente falta de disciplina en el gasto público. A este problema se agregaba la desconfianza de los organismos internacionales de crédito, el FMI en particular, en quienes manejaban la economía peruana, por su escasa competencia, según parece, en presentar siquiera cifras creíbles. Esto lleva al gobierno a preparar un nuevo "paquete" de medidas económicas, que reordene más drásticamente aún las finanzas públicas, recorte los subsidios a los productos de primera necesidad, restringiendo el consumo masivo y permita el acceso definitivo y sin cortapisas al crédito internacional. La misma tónica en política económica que se venía aplicando desde junio de 1975, solo que con mayor drasticidad. Al mismo tiempo, las medidas van acompañadas esta vez de un equipo económico civil que, por su trayectoria, es afín a los gremios empresariales y los partidos tradicionales, así como pasible de la confianza del FMI.

Las medidas económicas, sin embargo, logran lo que no había podido la izquierda marxista en los meses anteriores: un formidable paro

nacional de 48 horas, el 22 y 23 de mayo de 1978, que según Sulmont (1980:204-205) logra la participación de cuatro veces más trabajadores que el 19 de julio de 1977, o sea, alrededor de un millón de personas. Siguiendo el patrón del 19 de julio es precedido por movilizaciones regionales, aunque en este caso la extensión de las mismas es mayor y su coordinación más eficiente. Asimismo, la convocatoria es firmada por múltiples organismos sindicales, aunque destaca, con más nitidez que la vez anterior, la iniciativa de la CGTP, quizás por la oposición más clara del PC al gobierno, luego de las casi nulas reivindicaciones conseguidas. La plataforma de lucha reitera las demandas económicas y por libertades democráticas, similares a las del paro del año anterior, agregando un punto "contra el golpe fascista", que revela hasta donde se presentía la posibilidad de una solución más autoritaria, a pesar del retiro de Cisneros. El gobierno responde declarando el Estado de Emergencia Nacional, suspendiendo las garantías individuales, clausurando las revistas independientes, cerrando los espacios en radio y televisión asignados a la campaña de los partidos, postergando dos semanas la fecha de las elecciones y ordenando la deportación de 16 dirigentes sindicales y políticos de izquierda y un periodista de derecha, el director de *El Tiempo*. Entre los izquierdistas, habían 13 candidatos a la Asamblea Constituyente, uno de los cuales, general del Ejército en retiro, es detenido, algunas semanas más tarde, en el acto mismo de votación. Por último, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada advierte que el cumplimiento del calendario electoral está ligado a la mantención de la "paz social" y en esta tónica solo se conceden permisos para mítines finales al APRA, el PPC y el PC. Este conjunto, con la excepción de AP, excluido por decisión propia, es el mismo con que los militares inician conversaciones en mayo de 1977.

El paro y la respuesta gubernamental ponen las cosas nuevamente al rojo vivo, despertando en algunos sectores de izquierda la ilusión de que esta acción de masas podía derrotar la salida electoral en curso. El Partido Comunista Revolucionario (PCR) llega a levantar la consigna: ¡Paro Nacional: voto popular! y es seguido en este intento de boicot de última hora por el Partido Socialista Revolucionario. Incluso sectores del Partido Aprista, según relata Rafael Roncagliolo, consideran la posibilidad del retiro por el clima represivo existente. Pero la iniciativa no prende y es desechada. Diez días antes de las elecciones el gobierno

restaura la mayor parte de las libertades conculcadas y cuatro días antes permite la reaparición de las revistas ligadas a la derecha, el APRA y el Partido Comunista, finalmente el 18 de junio se lleva adelante el acto electoral.

El paro del 22 y 23 de mayo de 1978, al igual que el del 19 de julio de 1977, constituye principalmente una reacción espontánea frente a un "paquete" de medidas económicas de los militares. Su carácter, por ello, es también gremial y defensivo. Pero debido a la magnitud de las medidas y la experiencia de la izquierda en los meses anteriores mantiene una amplia coalición sindical y congrega una cantidad mayor de participantes. Sin embargo, no tiene el efecto político del anterior porque la situación del país es diferente. En julio de 1977 la salida política no estaba decidida, en mayo de 1978, el proceso ya estaba en curso, los militares opuestos a las elecciones estaban derrotados y el gobierno tenía interlocutores partidarios en el APRA y el PPC, y ocasionalmente en el PC. Por ello, el paro de mayo de 1978 difícilmente podía anular las elecciones del 18 de junio o restarles legitimidad. A pesar de la represión que acompaña a la salida electoral no había en ese momento ninguna otra alternativa política que permitiera el retorno de los militares a sus cuarteles y diera curso a la situación. Mal podía pues pretender reemplazarse el "acto electoral" de junio con el "acto de masas" de mayo. No solo no eran equivalentes, sino que el paro de mayo carecía del efecto político que sus dimensiones podían hacer suponer.

Las cifras electorales indican una población en capacidad de votar que llegaba al 30% de la población nacional, cerca de cinco millones de electores potenciales, de los cuales acudieron a votar aproximadamente el 85%, lo que dice, a pesar de la obligatoriedad del voto, del interés despertado por las elecciones. El triunfo fue de los partidos que se perfilaron como los mejores interlocutores del gobierno: el APRA, con el 36% de los votos y el PPC con el 24%. La izquierda viene luego, dividida en cuatro listas, como reflejo de la escasa importancia concedida a las elecciones. El FOCEP, con el 12%, el PSR, con el 7%, el PC, con el 6% y la UDP con el 4.5% (Roncagliolo 1980:59).

El voto mayoritario por dos partidos tradicionales, que a pesar de sus diferencias, representaba el Perú anterior a 1968, es decir, a las reformas

militares, expresaba el sentimiento anti-dictatorial del electorado manifestado en forma conservadora. Era una reacción anti-militar que se había venido incubando desde la época del velasquismo en diferentes sectores sociales y por distintas razones. En las clases altas y los partidos de derecha es una reacción contra las reformas y la pérdida de poder social y político que traían consigo, en las clases populares y los partidos de izquierda, una reacción contra los intentos de control militar de la organización social. Durante el gobierno de Morales Bermúdez, si bien la derecha recupera espacio, este sentimiento se generaliza, en particular con la aplicación del Estado de Emergencia y las ambigüedades frente a la transición. Este sentimiento es el que los partidos tradicionales saben representar mejor, incluso en el caso de AP que lo lleva al extremo retirándose.

Esta mayor capacidad de representación política, que tiene como antecedente su experiencia anterior en ajetreos similares, se manifiesta en varios sentidos. Primero, en su interés electoral, porque sentían como "clase política" que este era el régimen en el que se podían desenvolver mejor y llevar adelante su agenda, como dice el General Cisneros: "los políticos sienten que regresa el *modus vivendi*". Segundo, en su disponibilidad para entrar en relación con los militares y llegar eventualmente a un pacto, es decir, en su pragmatismo. Y, tercero, en su habilidad para captar el humor de la población que deseaba una salida política, pero no parecía dispuesta, mayoritariamente, a vivir una crisis revolucionaria. Asimismo, el primer lugar del APRA indica el mayor arraigo histórico de este partido, la ausencia de Acción Popular y cierto éxito en el manejo de su relación con los militares. Este último aspecto lo perfila como la carta continuista, capaz de unir con éxito la experiencia de sus dirigentes con su voluntad de pacto, mostrando a la par antiguas credenciales reformistas. El PPC capta el voto más claramente restaurador y se beneficia, sobre todo, de la abstención de Acción Popular.

En el caso de la izquierda, a pesar de su fragmentación, el alcanzar el 30% de la votación, la convierte en una fuerza electoral. Es difícil hacer comparaciones con resultados obtenidos por listas izquierdistas en comicios anteriores a 1968, por la marginación de que estas eran objeto. Sin embargo, el alto porcentaje alcanzado expresaba su influencia en el movimiento social y su inicial desarrollo político, a la vez que significaba

un cambio mayor en la composición de la representación nacional. Pero la fragmentación continuará siendo su característica distintiva, no permitiéndole hacer efectivo su peso electoral. Esta fragmentación tendrá como origen su desprecio por las elecciones que la llevarán en el período de la Asamblea Constituyente a usar la tribuna parlamentaria, mayormente, para hacer denuncias relativas a la lucha social. Dentro de la izquierda el porcentaje alcanzado por el FOCEP expresaba la preferencia del electorado por los caudillos radicales como Hugo Blanco y Genaro Ledesma, que habían enfrentado repetidamente en las dos décadas anteriores, no solo a los militares sino a todo el orden establecido. De igual manera, la votación obtenida por el PC y el PSR, reflejaba, a pesar de la contrarreforma, las simpatías velasquistas sobrevivientes. Mientras que la menor votación por la Nueva Izquierda, agrupada en la UDP, sancionaba su rigidez leninista y la falta de figuras nacionales.

D. LA INSTALACION DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y EL PACTO POLITICO

Sin embargo, la realización de las elecciones, con el importante significado que tiene al mostrar la voluntad del convocante y los participantes, no asienta definitivamente la salida política. La falta de un acuerdo entre el gobierno y los partidos ganadores de la contienda, APRA y PPC, impedía definir el rol de la Asamblea Constituyente y de esta manera el rumbo político.

Además, la movilización social agudizada por las medidas económicas de mayo, no había cesado. Los maestros agrupados en el SUTEP desarrollan una huelga de casi tres meses, entre mayo y julio, viéndose el gobierno obligado a concederles algunas demandas, por primera vez, desde que el sindicato se fundara en 1972. Los empleados públicos, también se movilizan en contra de recientes dispositivos que señalaban la inminencia de despidos masivos, necesarios para recortar el gasto público. En el curso de esta lucha, entre agosto y principios de setiembre, forman su propia central sindical nacional, el Comité Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), y obligan al gobierno a anular la legislación respectiva. Asimismo, en la que quizás sea la movilización de mayores repercusiones, por su impacto económico, los mineros desarrollan una huelga nacional en el mes de agosto, llegando masivamente a Lima para

presionar por sus demandas. A estas movilizaciones se agregan paralizaciones de bancarios y trabajadores de salud, con lo que la ciudad de Lima, centro hacia el cual convergen todas las luchas se convierte en diario escenario de movilizaciones callejeras. Todas estas luchas van a multiplicar el índice de horas/hombre perdidas, que había caído drásticamente de 6.8 millones en 1976 a 4.6 millones en 1977, con motivo del Estado de Emergencia, para subir a 36 millones en 1978, siendo el más alto en toda la década del setenta (Webb y Fernández Baca 1990:219).

La falta de un pacto político se deja sentir de inmediato desde el momento mismo de la instalación de la Asamblea Constituyente el 28 de julio. Haya de la Torre, líder histórico del APRA, elegido presidente de la Asamblea, declara a esta en el discurso inaugural "el primer poder del Estado" (Lynch 1980: 223) buscando ganar un espacio para la nueva entidad representativa, aunque sin desafiar la capacidad ejecutiva de los militares. Los sectores más radicales de izquierda presentan, por su parte, "la moción roja", que planteaba la necesidad de que la Asamblea asumiera funciones ejecutivas para solucionar las demandas de los sectores populares en lucha, explicitando, a pesar de su radicalismo y remota factibilidad, el problema que interesaba a todos: la división de funciones entre el gobierno militar y la Asamblea Constituyente. Esta situación, de no entendimiento entre gobierno y Asamblea, facilita que esta última se convierta, casi de inmediato, por intermedio de los grupos de izquierda, en caja de resonancia de la movilización popular, poniendo en verdadero peligro durante casi todo el mes de agosto la posibilidad de que pudiera llevar adelante sus propósitos constituyentes.

El debate se centraba entre la bancada izquierdista que exigía pronunciamientos sobre las luchas populares y, el APRA y el PPC, que trataban de llevar adelante la discusión del reglamento interno de la Asamblea. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo final entre estos partidos tradicionales (APRA-PPC) y el gobierno militar sobre el conjunto de la transición, restaba entusiasmo a la mayoría APRA-PPC para resolver la disputa con la izquierda. Pero la urgencia de la coyuntura, que adopta contornos de crisis, llevará a militares y partidos tradicionales, en conversaciones "secretas", según informa el semanario *El Tiempo*, a concretar este acuerdo hacia finales de agosto, lo cual se expresará en la rápida aprobación del reglamento interno de la Asamblea,

limitando esta a su función constituyente y en la promesa militar de llevar adelante elecciones tan pronto como terminen los trabajos de la nueva carta política. Consecuentemente la preocupación por la movilización social quedará subordinada al trabajo constitucional y el mantenimiento del orden público continuará siendo prerrogativa exclusiva de los militares. De inmediato, con la fuerza de este acuerdo, la mayoría retoma un control efectivo de la Asamblea y organiza el trabajo de la misma. La preferencia de la izquierda por continuar siendo portavoz del movimiento social y su negativa a asumir el rol de representante parlamentario, facilitan los objetivos de la mayoría y llevan a los grupos izquierdistas al aislamiento político.

Corolario de este pacto será la violenta ruptura de la huelga minera a principios de setiembre y la desarticulación de las otras luchas sindicales, gozando todas ellas de la indiferencia de la mayoría constituyente. Se había producido así el asentamiento definitivo de la salida política y creado las condiciones para el retiro ordenado de los militares, diferenciándose de allí en adelante la escena política de la lucha social y dando curso a la transición democrática, que ya no soportará el desafío de las demandas de los de abajo.

Habían pasado tres años desde la caída de Velasco, en agosto de 1975, y recién luego de la contrarreforma, de sucesivos "ajustes económicos" y de producidas las elecciones para la Asamblea Constituyente es posible un nuevo pacto político entre los militares y los dos partidos tradicionales que decidieron participar en el proceso electoral. Los primeros debieron dar repetidas muestras, en los planos de la economía y la política, a los segundos, para convencerlos de sus intenciones de retirarse del gobierno. Los partidos de izquierda, por su parte, colaboraron a su propia exclusión, sobrevalorando sus fuerzas y equivocando, gravemente, los terrenos de lucha. El movimiento social, cuya presencia había marcado cada coyuntura, será el gran perdedor en el período, sacando lecciones que tardarían años en reconocerse, pero ninguna reivindicación efectiva y menos una participación política en el corto plazo. Este pacto, de fines de agosto de 1978, permite a los militares empezar a recuperar la legitimidad perdida con las políticas represivas y asegura la salida que habían ido diseñando las Fuerzas Armadas y en particular el General Morales Bermúdez, cerrando por ello el período clave de transición a un nuevo régimen político.

TERCERA PARTE

Movimientos sociales y perspectivas democráticas

En esta tercera parte se presenta el estudio comparativo de tres casos de movimientos regionales y una federación obrera, que fueron ejemplos de la respuesta popular a la crisis del neoliberalismo y la contrarrevolución de Álvaro Fernández, así como de la distancia entre las demandas sociales y la apertura democrática. En los dos primeros casos se trata de los movimientos desarrollados en las ciudades de Chiclayo y Cuzco. El primero es el caso de la Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica del Perú (FETIMP). Más allá de la falta de representatividad que tiene toda selección, se escogieron estos casos por el grado de autonomía, organización y disciplina de que los constituyeron en el período estudiado, así como por que expresaban diferentes posturas sociales y distintas formas de relación con el Estado. En este sentido, se buscaban destacar dos aspectos que caracterizarían la coyuntura: la centralidad ciudadana en la movilización social y la emergencia de los movimientos regionales. En el caso de Lima, la ciudad de mayor concentración urbana del país, se escogió la federación obrera más representativa, con demandas centradas en salarios y condiciones de trabajo y pocas alianzas con los empresarios del sector y el Estado. En el caso de Chiclayo, un puerto en la costa norte del Perú, se trató un movimiento regional de base y liderazgo principalmente obrero, con demandas centradas en salarios, condiciones de trabajo y servicios urbanos, pero que se reclamaban a un Estado-patrón, dueño de la mayor parte de la estructura productiva del lugar. Por último, en el caso del Cuzco, una antigua ciudad en la sierra sur andina, se estudió un movimiento que

EN ESTA TERCERA PARTE PRESENTO EL ESTUDIO comparativo de tres casos: dos movimientos regionales y una federación obrera, que fueron ejemplos de la respuesta popular a la crisis del velasquismo y la contrarreforma de Morales Bermúdez, así como de la distancia entre las demandas sociales y la apertura democrática. En los dos primeros casos se trata de los movimientos desarrollados en las ciudades de Chimbote y Cusco. El tercero, es el caso de la Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica del Perú (FETIMP). Más allá de la dosis de arbitrariedad que tiene toda selección, se escogieron estos casos por el grado de autonomía, organización y beligerancia que los destacaron en el período estudiado, así como porque expresaban diferentes bases sociales y distintas formas de relación con el Estado. En este sentido, se buscaron rescatar dos aspectos que caracterizaron la coyuntura: la centralidad obrera en la movilización social y la insurgencia de los movimientos regionales. En el caso de Lima, la ciudad de mayor concentración obrera del país, se escogió la federación obrera más representativa, con demandas centradas en salarios y condiciones de trabajo y cuyos adversarios eran los empresarios del sector y el Estado. En el caso de Chimbote, un puerto en la costa norte del Perú, se tomó un movimiento regional de base y liderazgo principalmente obreros, con demandas centradas en salarios, condiciones de trabajo y servicios urbanos, pero que se reclamaban a un Estado-patrón, dueño de la mayor parte de la estructura productiva del lugar. Por último, en el caso del Cusco, una antigua ciudad en la sierra sur-andina, se estudió un movimiento que

expresa una coalición de intereses unidos en busca del desarrollo regional. Aquí intervienen clases medias, estudiantes, trabajadores e incluso elementos de la burguesía regional, desarrollando el conjunto una eventual e inestable relación con el campesinado. El blanco de este último movimiento es no sólo el Estado, sino también el centralismo limeño personificado en él.

La metodología fundamental de recogo de datos fue la entrevista abierta, aunque también se utilizaron colecciones de volantes y folletos en los diversos lugares visitados. En cuanto a las posibilidades de revisión de la bibliografía secundaria existente, esta ha sido diversa. Alguna, para los casos de Cusco y metalúrgicos, y casi nula para Chimbote. En cuanto a las entrevistas, se realizaron 25, ocho en Chimbote, diez en el Cusco y siete en metalúrgicos. En el caso del Cusco debo agregar la colaboración con el Antropólogo Elmer Abarca, que me permitió utilizar material de cuatro entrevistas más realizadas por él para un estudio similar. La gran mayoría de los entrevistados fueron líderes, tanto sindicales y/o populares y políticos. Este último quizás sea uno de los sesgos del trabajo, en tanto configura la versión de un estrato específico sobre los hechos y dice de las dificultades de esta metodología para abordar a miembros de base. Sin embargo, este liderazgo intermedio suele tener estrechos lazos con su audiencia y expresa una forma de interpretar sus demandas, mediadas, sin duda, por el discurso ideológico y las necesidades de los grupos partidarios. Además, he tratado que los entrevistados provengan de las tendencias políticas y sectores sindicales representativos en cada uno de los casos, de manera tal que el resultado sea lo más equilibrado posible. El tenor de las entrevistas abordaron, en forma general, los conflictos fundamentales que se produjeron en cada caso, tanto dentro del movimiento social, principalmente sindicato y/o organización popular con los partidos políticos, como entre el movimiento y las autoridades, ya fueran locales, regionales, nacionales y/o empresariales. Asimismo, las demandas que establece cada movimiento con respecto de sus adversarios y las características del espacio social que construye en la lucha por estas demandas.

Metalúrgicos: el clasismo paradigmático

A. LOS OBREROS DE MODA

LOS TRABAJADORES METALÚRGICOS fueron el sector obrero de mayor desarrollo numérico, organizativo y político en el período que va de fines de los años sesenta a mediados de los setenta. Despertaron la atención de los partidos de izquierda, de los gobiernos de aquel período y también de los intelectuales que buscaron entender el fenómeno de liderazgo obrero en el movimiento popular de la época (Agüero 1980) (Bonfiglio y Parodi, 1983) (Parodi 1986) (Nieto 1986) (Balbi 1989). Se condensaron en este sector el afán de un proletariado joven, asentado básicamente en Lima, por desarrollarse sindical y políticamente, con las influencias de la izquierda marxista y las nuevas condiciones que ofrecían las reformas desarrolladas por los militares.

No se trata, sin embargo, de obreros metalúrgicos, que trabajen la transformación del mineral metálico, sino de obreros metal-mecánicos, que trabajan de diversas formas el metal mismo. Confusiones propias de su origen, ligado al artesanado, los lleva a tener esa denominación equívoca. Pero allí no terminan las proyecciones de su heterogeneidad. Este "sector metalúrgico" agrupa actividades que van desde la fabricación de carros, autopartes, aparatos eléctricos, astilleros, artículos metálicos en general y talleres diversos (Bonfiglio 1983), variando los establecimientos en tamaño y tecnología.

El desarrollo del sector metal-mecánico está ligado al conocido modelo de desarrollo industrial, denominado "sustitución de importaciones", que impulsan diversas políticas estatales durante las décadas del sesenta y setenta y podemos decir que correría la suerte del mismo, acompañándolo en su crisis de 1976 para adelante. Es así que el proletariado del sector experimenta un crecimiento muy significativo en comparación con las otras ramas de la industria. Sulmont (1977:133) indica que pasan de 8,800 en 1955 a 32,000 en 1970, lo que los llevaría según las estimaciones del mismo autor a ser aproximadamente una cuarta parte de los obreros fabriles de Lima. Por supuesto que ello no nos debe llevar a sobrestimar su importancia en la fuerza laboral total, ya que los obreros fabriles, más de la mitad de los cuales se concentran en Lima, apenas alcanzan el 5% de la PEA nacional peruana. Por otra parte, sin embargo, Galín *et al.* (1987:41) llaman la atención sobre el alto grado de concentración de la población obrera en el Perú. Es decir, son pocos frente a la PEA total pero gran parte de ellos, un 45% , tiende a concentrarse en las empresas más grandes, lo que redundaría en una mayor capacidad de organización y lucha sindical, en particular en momentos de auge económico.

De igual forma, se trata de un proletariado joven y migrante, con una importante composición andina. Tanto Verdura (1986:68) como Galín *et al.* (1987:50-51) ponen la cifra de migrantes entre la población obrera limeña de la década del setenta alrededor del 70%, porcentaje que, de acuerdo a nuestras entrevistas y el importante peso de los metalúrgicos en dicha población obrera, debe también ser relevante para ellos. La juventud, asimismo es característica saltante en el sector, no sólo a nivel global, sino en especial entre la dirigencia. La presencia de migrantes, particularmente andinos, por el contrario, va a ser importante entre la masa obrera, pero no tan significativa entre los dirigentes, tal como veremos más adelante.

La relación obreros-Estado va también a ser fundamental, en el caso metalúrgico, como en todo el movimiento social en la década del setenta. El Estado señala la reglas de juego del conflicto sindical, por lo tanto de su variación depende, en buena medida, la dinámica del movimiento. En este sentido el gran conflicto es con el Estado, en especial de 1975 en adelante, cuando Morales Bermúdez empieza a desmontar las reformas

de Velasco. En este punto la dirigencia metalúrgica es particularmente sensible, consumiendo buena parte de su actividad gremial en largas discusiones acerca de las características reales de las medidas gubernamentales. Sensibilidad que como veremos luego tiene a la base una profunda desconfianza del Estado y de todo aquello que pudiera venir de él.

Sin embargo, el Estado no es el patrón directamente, a quienes los obreros deben enfrentar en su vida cotidiana es a los empresarios. El Estado, más bien, busca asumir un rol de mediador en el conflicto sindical. Es decir, intenta comportarse como árbitro de los conflictos laborales; según refieren los dirigentes obreros, ya no "los sacan a patadas" del Ministerio de Trabajo como sucedía con frecuencia antes de 1968. Este rol de árbitro, que los empresarios lamentan como parcialidad estatal durante todo el período velasquista, es el que hace que el conflicto obreros-Estado, más allá de la retórica ideológica de los sindicatos, no tome, tan temprano como en 1973, las dimensiones que tuvo en Chimbote.

Sus dimensiones, juventud e importante componente migrante van a crear las condiciones para que el sector metalúrgico se convierta en un polo de atracción de las corrientes políticas izquierdistas que empiezan o desarrollan su trabajo sindical. Sobre esta base se da un particular dinamismo de los trabajadores metalúrgicos, que se va a traducir en una gran capacidad de organización y movilización de su propio gremio, así como de liderazgo de otros sectores sindicales y populares de Lima, en especial en el período que va entre 1969 y 1976. El gremio que los agrupa, la FETIMP, llega a congregarse 115 sindicatos en ese período. De igual forma, entre 1969 y 1976 la FETIMP desarrolla 3 paros de 24 horas, 4 paros de 48 horas y 2 huelgas generales de 14 y 9 días de duración respectivamente, entre los que se incluye un paro de solidaridad con los trabajadores de Chimbote por la represión de 1973 (Bonfiglio 1983, Parodi 1986). También y aunque algo desligado de su ciclo más importante de lucha, se da una participación especialmente intensa en el paro nacional del 19 de julio de 1977. Todo esto tomando únicamente en cuenta a la Federación y no a los sindicatos bases, lo que nos da una idea de la importancia política que va tomando la FETIMP, cuando traduce el enfrentamiento con los empresarios privados, a nivel de cada fábrica,

en una exigencia al gobierno para que mejore las condiciones para conseguir sus demandas.

En este caso, por más que nuestro interés general está centrado en el período 1975-78, tomaremos el conjunto de la dinámica sindical y política del gremio metalúrgico, que va de 1969 a 1978, porque creemos que el período 1969-1976, de crecimiento y auge, explica y forma una sola unidad con el momento de crisis y división entre 1976 y 1978.

Estas características van a hacer del proletariado metalúrgico el sector que mejor encarne el encuentro que se da entre los partidos de la izquierda marxista y los trabajadores en la década del setenta. Asimismo, será en este sector donde ese encuentro perfile de manera más nítida la identidad resultante denominada "clasista" por sus connotaciones de autonomía, en relación a la construcción de su propio espacio sindical e independencia frente al poder de los empresarios y el Estado. El término desata polémicas entre las diferentes tendencias que hacen trabajo sindical, buscando reivindicarlo cada cual para sí, pero en todos los casos significa conciencia de pertenencia a un grupo social que está ganando organización y poder.

B. LA IZQUIERDA QUE LLEGA A LOS SINDICATOS

El motor de la organización sindical metalúrgica son los partidos de la izquierda marxista. Prácticamente no hay dirigente sindical que no tuviera ligazón con los partidos, por más caudillo que fuera en su práctica, siempre se le conocía alguna inclinación. Como dice Enrique Tineo, obrero metalúrgico y militante de la Nueva Izquierda que antes de cumplir su mayoría de edad llegó a ser Secretario General de su sindicato base:

"Se pensaba que los partidos eran primero, eran la prioridad número uno. Los sindicatos más bien debían apoyar a los partidos. Yo me acuerdo que habían compañeros partidarizados que saqueaban la economía del sindicato para darle al partido."

O Rufino Suyón, también obrero metalúrgico y militante del PCR, que llegó a ser Secretario General de su sindicato base y delegado a la asamblea de la FETIMP:

"Un dirigente sindical que era militante se la jugaba por su camiseta digamos. O sea, por la camiseta del partido. Lo que el partido canalizaba iba y se planteaba a los sindicatos."

Aclaran, sin embargo, que la simpatía obrera hacia la presencia política era más por los caudillos partidarizados que por los partidos como tales. Los trabajadores simpatizaban con el dirigente que atendía sus intereses inmediatos y en esa medida con el partido que él representara. En la literatura sobre el tema en la década del ochenta (Bonfiglio y Parodi 1983, Parodi 1986) hay la tendencia a señalar esta preeminencia como uno de los graves problemas del movimiento, denominándola "sustitucionismo", es decir, la sustitución del sindicato por el partido político en las funciones propias de aquel. Sin embargo, las explicaciones se limitan a constatar la sustitución y lamentarla sin buscar entender las formas de hacer política, de la época y del medio sindical.

La primera cuestión a revisar sobre esta presencia partidaria es la ideológica. José Valdivieso, activista del Partido Comunista Revolucionario-"Trinchera Roja" nos dice que:

"Eran partidos de élite y sobreideologizados, eso establece un monopolio y un sistema de dirección. Sin embargo, eso era compatible con una ideología muy obrerista que reconocía la dignidad del trabajador."

Rufino Suyón, nos cuenta al respecto, que él fue capaz de resistir el asedio de la empresa, que lo tenía encerrado en un canchón aislado de sus compañeros durante las ocho horas de trabajo, por la fuerza de la ideología. Cuando se refiere a la ideología alude al planteamiento marxista-leninista de la política, en una versión, para usar sus propios términos "economicista", porque buscaba propiciar la acción política a partir de la lucha sindical, de las demandas inmediatas de los trabajadores, presente en este caso quizás con más vigor que en los otros estudiados. Esa es la concepción que presidirá la acción de estos grupos radicales. El primer elemento es la urgencia de la revolución. Suyón señala:

"Yo le digo que para mí la revolución estaba a la vuelta de la esquina porque nada me importaba más que eso. Así se sentía, nosotros creíamos en eso",

y frente a estas urgencias todo debía subordinarse. En el caso de los dirigentes influenciados por el Partido Comunista la percepción es la misma, aunque su apoyo al gobierno reformista los hacía ver en él algunos elementos de revolución ya en proceso. El segundo, el papel de vanguardia que le tocaba cumplir a la clase obrera, con lo que hacían vivir, según otro dirigente, una borrachera a los obreros captados. Ese rol predestinado les daba cierto orgullo y resaltaba la importancia de su actividad sindical y política. El tercero, el papel del partido, como portador de la conciencia para la clase obrera y dirigente de sus acciones, tal como varios de ellos recuerdan haberlo leído y discutido en el "Qué hacer" de Lenin.

En este sentido, la política se entendía, como la representación sindical que los partidos eran capaces de lograr, actuando mediados por ella e identificados muchas veces por las siglas del gremio que controlaban. Valdivieso señala al respecto: "nosotros estamos de alguna manera identificados con una nomenclatura sindical, nuestra traducción a la política son los sindicatos". Jaime Cáceres, principal figura del liderazgo metalúrgico de los setentas y militante del PCR, agrega (Parodi 1983) que los partidos necesitaban llegar a la dirección del gremio para hacer política, el problema central para los dirigentes de la época era que los líderes llevaran adelante "la dirección correcta", ella lo decidía todo. Esto, que era generalizado para toda la izquierda de los setentas, se presentaba en forma más acentuada en los partidos de la Nueva Izquierda que en el Partido Comunista, es decir, en grupos cuya trayectoria en la vida pública era menor y al mismo tiempo, en forma más intensa, en gremios como el metalúrgico, donde la influencia izquierdista era muy alta y casi excluyente. Caló tan hondo esta concepción sindical de la política que cuando se produjo la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978, los partidos, mayoritariamente, optaron por lanzar a dirigentes sindicales en lugar de políticos para los cargos respectivos. José Valdivieso refiere que:

"No fue una decisión electoral, fue una decisión de principios. Iban los dirigentes populares porque era una lista popular, entonces ellos tenían que estar a la cabeza y darle la legitimidad."

Esta concepción restringida de la política, tal como señalamos en la Segunda Parte, contribuiría a que la izquierda marxista no lograra una

posición más favorable en el proceso de transición democrática, aislándola al plano de la movilización social.

Delmer Quiroz, también dirigente sindical que se inicia en una base metalúrgica y que fuera llevado a la actividad gremial por el trabajo de promoción que desarrolla la Nueva Izquierda, en particular Vanguardia Revolucionaria, agrega que este estilo de hacer política por parte de los partidos "animó" en gran medida la vida sindical, antes que exclusivamente restringirla, como quisiera plantear el "sustitucionismo". Quiroz señala:

"esta competencia que digo, esta sana competencia que nos hace pelearnos por ver quién tomaría los nuevos sindicatos, quién influiría en ellos, quién trabaja para organizarlos, para irlos a crear, a gestionar su reconocimiento ante el Ministerio de Trabajo. Esto fue muy bueno".

El mismo era considerado "padrino" de los nuevos sindicatos organizados por su asesoría. Esta competencia, agrega Jorge Ramírez, obrero metalúrgico de base, es la que finalmente permitiría el liderazgo político y la importancia nacional que alcanzó la Federación.

Sin embargo, esta actitud de los partidos tenía rasgos autoritarios. "No había una táctica como movimiento obrero espontáneo, los partidos traían las tácticas" dice Tineo, "ellos decidían lo que iba a pasar en el Sindicato" asevera Ramírez. La célula de cada partido en determinada base diseñaba una táctica y buscaba una correlación de fuerzas dentro de la Asamblea del sindicato que le permitiera llevarla adelante, convirtiendo a esta casi en un "simulacro de democracia". La habilidad política no era entonces solo habilidad de organización y dirección sino también de manipulación. Ahora bien, planteada exclusivamente como manipulación la acción del partido aparece arbitraria. Sin embargo, esta iba precedida de un largo proceso de captación de trabajadores y/o dirigentes, los cuales a su vez establecían, o tenían ya, por múltiples razones, redes de lealtad, que podían ser de parentesco, compadrazgo, paisanaje, que convertían en mecanismo político. Había entonces la construcción previa de las bases para una legitimidad. Que los mecanismos no fueran democráticos no nos puede llevar a señalar que la acción partidaria fuera solo fruto de la manipulación.

Pero a pesar de ello la pregunta sigue siendo ¿por qué las bases soportaban este margen de manipulación? Parodi (1986:55-76) ensaya una respuesta, donde señala que lo hacían porque los dirigentes sindicales partidarizados eran efectivos en la consecución de beneficios económicos. Esto parece ser cierto, sobre todo porque guarda una correlación directa con el inicio de la crisis económica, en 1976, cuando conseguir reivindicaciones se vuelve bastante más duro. Sin embargo, restringir el problema a beneficios económicos es ver solo una parte de él. Los partidos logran un nivel de organización y centralización sindical como nunca antes había existido en el gremio metalúrgico y lo hacen con independencia del Estado y los empresarios, es decir, desarrollando los gremios como espacios que creaban condiciones de autonomía para los trabajadores. El que la organización no fuera lo fuerte que suponía el discurso radical y la autonomía no fuera tal frente a los propios partidos, tal como se demostraría en la coyuntura de crisis, no implica que uno u otra no existieran como logros del sindicalismo metalúrgico de los setentas.

Pero no sólo existe capacidad de manipulación por parte de los partidos, también hay un problema cultural de por medio. Delmer Quiroz, en este caso entrevistado por Jorge Parodi (1983), se va a referir a él cuando señala que los obreros mantenían, de alguna manera, una actitud servil frente a los partidos, heredada, quizás, del mundo señorial andino del que muchos provenían o de la experiencia de trato con las propias clases altas de la capital. En este caso era una actitud de sumisión frente a quienes traían un mensaje, muchas veces, como insiste Quiroz, poco inteligible para los trabajadores. Este mensaje, que se expresaba en claves nuevas en el lenguaje con el que se procedía a analizar las cosas y en las consignas que debían ser la síntesis de estos análisis, producía un doble efecto, por una parte reforzaba la sumisión, vía el respeto a quien tenía una determinada capacidad de reflexión, y por otra, implicaba una distancia, entre activistas políticos y trabajadores, muy difícil de superar.

Quizás un buen ejemplo de esta distancia sea la dificultad que encontraban los trabajadores, captados como militantes por los partidos de izquierda, para progresar dentro de las estructuras de poder de estos últimos. Difícilmente, como afirman varios dirigentes de la época, iban

más allá de la dirección intermedia de estas organizaciones. Esta dificultad para ser dirigentes político-partidarios se expresaba también en las dificultades que tenían para llevar adelante sus puntos de vista sobre los problemas sindicales que los afectaban directamente. Muchas veces el partido decidía contra lo que era el consenso mayoritario de los trabajadores y los dirigentes se veían obligados a llevar adelante esta resolución o, como a veces ocurrió, producir la ruptura de su organización política. Este último fue el caso de la fuerza dominante en la FETIMP durante la década del setenta, el Partido Comunista, cuya ruptura, entre 1977 y 1978, desemboca en la división del gremio metalúrgico y también el de la fuerza más importante de oposición, dentro de la Nueva Izquierda, el Partido Comunista Revolucionario, que sufre en la misma época una escisión, estrechamente ligada a su trabajo metalúrgico.

Pero los partidos que trabajan en el gremio metalúrgico presentan matices significativos en su estilo y propuesta políticos que los llevan a estar, tal como señalamos más arriba, en aguda competencia. Los dos grupos más importantes son, por un lado el Partido Comunista y por otro la Nueva Izquierda, que agrupa en su interior varias organizaciones políticas, pero cuyo denominador común es el enfrentamiento al PC. La competencia entre ambos agrupamientos va a estar marcada por una aguda discrepancia sobre la naturaleza del régimen militar y las consecuencias de ello para los trabajadores. El Partido Comunista plantea el carácter revolucionario del régimen y de allí su precaución, sobre todo en sectores productivos importantes como el metalúrgico, para apoyar los reclamos obreros. La Nueva Izquierda por el contrario, opinaba mayoritariamente que se trataba de un gobierno que hacía reformas para evitar la revolución, por lo tanto debía oponérsele, por ello su tendencia a organizar y polarizar la lucha reivindicativa.

En el caso del Partido Comunista, se trata de la fuerza más antigua de las que actúan en la FETIMP en la década del setenta. Su presencia en el gremio venía desde la fundación de este en los años cincuenta y su actuación política está marcada por dos rasgos claves: el control burocrático de los aparatos sindicales, la propia Federación en este caso y su posición favorable a las reformas que realiza el gobierno de Velasco. En el primer caso, el control del aparato sindical constituye una de las

formas más importantes de desarrollo del trabajo gremial que le permite al PC expandir su influencia entre los trabajadores metalúrgicos, principalmente a través de la formación de nuevos sindicatos y de la asesoría de sus pliegos de reclamos. El uso partidario de esta forma de trabajo sindical se mostraría particularmente útil para la mantención y reproducción de posiciones de poder en el gremio. Es el caso de la referencia que hace nuestro entrevistado, José Chávez Canales, Secretario General de la FETIMP entre 1974 y 1978 y militante del PC, a la importancia del trabajo con los sindicatos chicos, más proclives a la influencia de quien maneja el aparato sindical, que eran atendidos no tanto en función de llevar el debate político nacional sino más bien en sus necesidades inmediatas de reivindicación económica. Señala Chávez que esta influencia le permitía a su tendencia mantener una correlación favorable dentro de la Federación a pesar del importante peso político que logran sus adversarios. Ello se reflejaría en el triunfo que obtienen las listas del Partido Comunista en las elecciones para la Junta Directiva de la FETIMP en 1974 y 1975, años de máximo auge de la Federación. Aunque sobre esto último, otro entrevistado, Angel Gallardo, antiguo dirigente de la FETIMP desde la década del sesenta y también ligado al PC, apela a resaltar un sentimiento más primario de los trabajadores: "ellos cuidaban su trabajo, por eso no votaban ultra".

La posición del PC frente al gobierno era más posible de sostener en el gremio metalúrgico, que en otros lugares como Chimbote, por el impacto que habían tenido en el sector las concesiones recibidas por el movimiento sindical, en particular las facilidades para el reconocimiento de nuevos gremios y el rol de árbitro que el Estado, en esa coyuntura, insistía en jugar. Esto no es óbice para que un punto de vista de este tipo fuera violentamente contestado por otras fuerzas más radicales, pero nos muestra el espacio para una mayor competencia política allí donde el Estado no era directamente el patrón.

La queja reiterada de la Nueva Izquierda contra el PC era que este no estaba interesado en promover las luchas por las reivindicaciones de los trabajadores, llevando al extremo su celo por no perjudicar al gobierno. Esto es algo que se menciona tanto para el período de auge de la FETIMP, entre 1972 y 1976, como para el momento del Estado de Emergencia, entre 1976 y 1977 y el propio Paro Nacional, en julio de 1977. Los

dirigentes del PC, sin embargo, responden señalando que la política de los sectores más radicales era aventurera. Pablo Checa, dirigente metalúrgico y militante del PC, entrevistado por Parodi (1983), dice que rompen el frente único sindical al poner por delante las diferencias políticas. Checa alude al tratamiento de enemigo, no sólo de adversario, que se daba entre la Nueva Izquierda y el PC, lo que llevaba muchas veces a perder de vista el conflicto con los empresarios y el gobierno. Chávez Canales agrega que esta "politización" excesiva descuidaba, asimismo, a la gran masa de trabajadores que tenían poco acceso a las discusiones entre dirigentes ya iniciados y más preocupación por sus necesidades inmediatas y los riesgos de la lucha.

La Nueva Izquierda era la fuerza nueva en el gremio metalúrgico que como dice Delmer Quiroz, "dinamiza hasta al propio PC". Su presencia se da recién a partir de 1970 y si bien hay múltiples núcleos políticos destacan los que, según Enrique Tineo, "respetan el sentido común de los trabajadores", en referencia a lo que él mismo denomina el "maoísmo heterodoxo", es decir, el tronco político que inaugura Vanguardia Revolucionaria y que continúan como sucesivos desprendimientos, cada cual del anterior, el Partido Comunista Revolucionario y Trinchera Roja. Existen también otros grupos, maoístas ortodoxos y troskistas, pero de menor significación que los primeros.

Pero esta presencia nueva en el ámbito gremial metalúrgico, no sólo significa una posición política más radical y particularmente atrayente, sino también un nuevo estilo político que considero importante resaltar. Ambos aspectos implican un serio reto a la hegemonía del PC. La posición radical se identifica rápidamente con la desconfianza ancestral frente al Estado y el estilo directo remece los reflejos burocráticos del aparato sindical.

A diferencia del Partido Comunista, cuya influencia se extendía a partir de los aparatos sindicales, estos radicales venían mayormente de fuera de la clase obrera, eran estudiantes que iban a vender el periódico de su organización a la puerta de las fábricas y buscaban conversación con los trabajadores. Rufino Suyón rememora esta situación diciendo: "era como cuando uno enamora a una chica" y Jorge Ramírez señala: "En la Nueva Izquierda había otro estilo, el activista era mucho más perma-

nente, te seguía y te acompañaba a tu casa, compartía hasta los más cotidiano". Se trataba entonces de un proceso de captación muy directo con el obrero de base, casi personal, donde destacaba una conducta, en palabras de otro dirigente obrero metalúrgico de esos años, de "austeridad, desprendimiento y disciplina" así como una actitud "paternal" que desarrollaba especial respeto de los jóvenes obreros por los jóvenes universitarios.

Sin embargo, la relación entre activistas políticos y dirigentes sindicales dejaba entrever también agudas contradicciones que expresaban, muchas veces, la diferente extracción social de ambos grupos así como la frustración de estos últimos al tratar de convertirse en políticos. Suyón, por ejemplo, se refiere a la "división del trabajo" que había entre unos y otros, señalando que "los que daban la cara" eran los dirigentes sindicales y que los activistas políticos, no participaban directamente en las movilizaciones que se organizaban. Señala así:

"Nosotros creíamos...se suponía que...bueno nos decían que nosotros éramos la clase dirigente. Los militantes estudiantiles nos veían como una especie de semi-dioses, nos ensalzaban, nos llevaban a todo sitio y un poco que nos metían una borrachera. Pero estos militantes, que eran los dirigente máximos, no aparecían en escena. Ellos trabajaban tras bambalinas, o sea cuando había una movilización o un paro había que cuidarlos de la represión. Hasta ahora yo no me explico si era efectivamente por seguridad...o era que realmente en los momentos que había que enfrentar, no tenían el coraje de enfrentar, no me lo explico aún".

Agrega también, apreciando estos conflictos en retrospectiva, la impresión de que los activistas políticos estudiantiles de los años setenta "usaron" el discurso revolucionario y su relación con los trabajadores para ser figuras públicas en la década siguiente. "Nosotros no pensábamos en ser regidores o parlamentarios" dice, posiciones, señala, que les estaban vedadas a los trabajadores por carecer de contactos fuera de su mundo laboral.

Pero esta opinión es controvertida. Jorge Ramírez señala, por el contrario, una relación, distinta, donde, según nos dice: "tú utilizabas al

activista para que vaya a la puerta del sindicato, deje prensa y ajuste algunos contactos", o sea, también se producía una instrumentalización de los partidos por parte de los sindicalistas. Aunque no parece haber sido el caso más frecuente es un aspecto a tomar en cuenta para entender a cabalidad la disposición obrera para la lucha sindical.

La política radical y el estilo directo, con todos los problemas de venir "desde fuera" de la clase obrera, tuvieron un impacto significativo entre los metalúrgicos, estableciendo la competencia a la que hacíamos alusión y permitiendo, en un momento de relativa expansión de la industria, "el brillo" tanto organizativo como político de la FETIMP.

C. LA DINAMICA SINDICAL: UN CONFLICTO DE INTERESES PARCIALES.

La FETIMP en la década del setenta tiene un período de despegue organizativo entre 1969 y 1972, otro de intensa lucha reivindicativa entre 1972 y 1976 y un último de crisis que finalmente la lleva a la división entre 1976 y 1978. Como señala Bonfiglio (1983) en 1969 se junta el ánimo del PC por reorganizar la FETIMP, que venía de una etapa de aguda debilidad, el ímpetu de los grupos de la Nueva Izquierda por desarrollar trabajo sindical en un sector relativamente nuevo e importante como el metalúrgico y la urgencia del Gobierno Militar de desplazar al APRA del movimiento sindical, todo esto, agregaríamos en el marco de un programa de reformas que concedería importante fuerza de negociación a los trabajadores. Angel Gallardo, denomina a este un período de "puertas abiertas". Ello permite que entre 1969 y 1972 el número de sindicatos afiliados pase de 15 a 62, buena parte de los cuales eran sindicatos nuevos, es decir, formados donde antes no había existido organización gremial alguna. Esta "avalancha", como la denomina Delmer Quiroz, continúa, llegando a alcanzar 115 organizaciones afiliadas en 1975.

Ahora bien, ¿cuáles fueron esas reformas que promovieron la capacidad de negociación de los trabajadores? Principalmente tres: la nueva ley de estabilidad laboral, la ley de Comunidad Industrial (denominada genéricamente Comunidad Laboral) y la nueva actitud del Estado como mediador en el conflicto de trabajo. Las dos primeras son leyes que se

dan en 1970 y la tercera pasará a constituir característica central de los primeros años del velasquismo.

La nueva legislación sobre estabilidad laboral, que garantizaba la estabilidad en el empleo a los tres meses de empezar a trabajar, se constituyó en la base de todos los demás derechos que lograron los trabajadores en este período. Con ella, estos empezaron a tener capacidad real de negociación con la patronal. Hasta ese momento formar un sindicato había sido "tarea de bravos" según nos dice Quiroz, en la cual todos los comprometidos arriesgaban ser despedidos de inmediato. La estabilidad, por el contrario, permitió extender la organización sindical a los niveles que señalamos líneas arriba. Pero, a pesar de significar un cambio tan importante para la lucha de los trabajadores, la ley de estabilidad laboral de Velasco fue motivo de enconadas polémicas entre las diferentes tendencias. Los radicales, la encontraban insuficiente y planteaban su derogatoria, aunque sin una alternativa clara de recambio, el PC, por el contrario, objetaba tan solo unos cuantos artículos y planteaba que era una conquista de la clase trabajadora. La valoración cabal de esta reforma solo vendría años después cuando el gobierno de Morales Bermúdez la deroga y emite una legislación mucho más restrictiva de este derecho.

Con la Comunidad Industrial sucede algo similar. Se trata de una forma de cogestión empresarial que ampliaba la participación de los trabajadores en la conducción de la empresa y les concedía la propiedad creciente de la misma hasta un máximo del 50%. Sin embargo, en un primer momento es tomada con desconfianza por los trabajadores, creyendo que podía constituir una competencia del sindicato, o que, eventualmente, buscaría reemplazarlo. Los más radicales tomarían esta actitud negativa, absteniéndose de participar en su constitución y en la elección de sus autoridades, "no nos interesaba" recuerda Rufino Suyón, lo que llevaría, en algunos casos, a que sectores minoritarios tomen el control de ellas. Sin embargo, la práctica las transformaría en otro frente de lucha con la empresa, convirtiendo la participación en ellas una prolongación de la actividad sindical, donde el producto efectivo en términos de cogestión sería mínimo, pero, a través del cual obtendrían valiosa información sobre la situación real de la misma, lo que les ayudaría en la confección de sus pliegos de reclamos. Delmer

Quiroz señala que esta evolución de la posición de los trabajadores sobre la Comunidad Industrial, donde el intento democratizador del velasquismo era quizás más palpable que en otros terrenos, tiene efectos en los partidos de izquierda, permitiendo algunos matices en su apreciación del gobierno militar.

Es significativo cómo la apreciación de las condiciones que permiten la organización sindical presenta agudos contrastes entre los trabajadores. Los más antiguos, generalmente ligados al Partido Comunista, que podían comparar la situación de los setentas con etapas anteriores del movimiento sindical, tienen una apreciación más bien positiva. Es el caso de Angel Gallardo, que señala el ejemplo de su sindicato base, el cual en varias oportunidades consiguió reivindicaciones que no había incluido en sus pliegos de reclamos, es decir, concedidas directamente por el Ministerio de Trabajo, cosa impensable en los gobiernos de Prado o Belaúnde. Los obreros más jóvenes, en cambio, casi siempre ligados a la Nueva Izquierda, cuya situación no les daba un término de referencia más preciso, tienden a tener una apreciación negativa, a considerar una "patraña", como recuerda Tineo, las concesiones del gobierno de Velasco. Pero las posiciones negativas, a pesar de la influencia del PC, predominaron. Angel Gallardo prefiere trascender el conflicto político para entender este predominio y lo refiere más bien a ciertas características de pasividad y falta de capacitación de los trabajadores, así nos dice:

"El gobierno militar de Velasco dió leyes de reformas bastante positivas, pero que los trabajadores no supimos analizar y defender esas posiciones en determinado momento. Fuimos muy pasivos y no entendimos esas leyes. Como consecuencia de eso, ya pues vienen los empresarios, vienen los generales, los de derecha, los que están en contra de todas estas cosas y lo desactiva. Porque si nosotros hubiéramos sido conscientes, hubiéramos hecho un estudio y hubiéramos analizado profundamente todas esas reformas. Entonces, en el momento que nos quieren quitar hubiera sido bien difícil."

Y, ¿cómo es el dirigente que produce este desarrollo organizativo del sindicalismo metalúrgico? Jorge Parodi (1986:61) lo define como un "políglota social" por los múltiples roles de mediación que desarrolla, con su propia base, entre los mismos dirigentes, con el partido, la

empresa y el Estado, con los que, además, emplea diferentes lenguajes y claves culturales, que le permiten obtener de cada cual algo específico para su posición de poder. Se trata, asimismo, de trabajadores capaces de ejercer esta función por su relativamente alta educación. Si educarse es un canal privilegiado para la movilidad social en el Perú esta no es una excepción. Los metalúrgicos se ubicaban en una población obrera limeña que mostraba ya altos niveles educativos en la década del setenta. Galín *et al* (1986:94) nos muestran que aproximadamente un 45% de los obreros limeños tenían secundaria incompleta o más, proporción que crecía entre los de mayores ingresos, como es el caso de los metalúrgicos. Tener educación superior o técnica era una condición de prestigio que se consideraba una característica importante para la dirigencia. Rufino Suyón empieza como Secretario de Estadística de su sindicato por ser estudiante universitario de Ingeniería y a partir de allí se interesa en la política. Enrique Tineo, nos señala al respecto:

“La capacitación es un factor de poder, tener información, tener cultura, también es un factor de poder para ser dirigente sindical. Mi experiencia personal es de una formación principalmente por mi iniciativa, por que yo siempre he estado con las lecturas, he sistematizado lecturas de los clásicos (Marx, Lenin). Lecturas también de debates, de práctica sindical y la formación que he tenido en los debates internos de los partidos políticos.”

Esta educación permitía a la capa dirigencial tener un acceso algo más fluido a la literatura marxista que traían los activistas políticos y de esta manera organizar un discurso ideológico para su trabajo sindical. Sin embargo, este es un fenómeno que tiene efectos ambivalentes porque por una parte les permite a los dirigentes organizar una cosmovisión, que los acerca a los partidos de izquierda y les da cierto status como dirigentes ilustrados, pero por otra, los aleja de su propia base, que no entiende el nuevo lenguaje, a menudo un conjunto de clichés, que usan los dirigentes.

Pero ¿cómo se llega a ser dirigente? Más allá de una cierta disposición básica que incluye juventud y educación, Tineo nos señala que había que liderar a una tendencia política dentro del sindicato y competir con las otras tendencias:

"El primer problema para llegar a ser dirigente es una lucha de posiciones. En mi sindicato base había compañeros del PC, troskistas y del PCR. Para ser dirigente tuve que hacer un equipo de compañeros que teníamos simpatías por el PCR, para poder confrontar a las demás fuerzas políticas. El primer problema era confrontar en una dura lucha interna a los troskistas y el PC. Yo supero estas contradicciones y con mucha desconfianza de parte de ellos asumo la responsabilidad de Secretario General cuando tenía 19 años. Incluso no tenía todavía Libreta Electoral. Luego los amarillos que les llamábamos (obreros pro-patronales) quisieron cuestionarme por ser menor de edad pero yo ya había mandado la personería jurídica (al Ministerio de Trabajo)."

Es decir, que había necesidad de una socialización política, casi siempre previa, partidaria o cercana a un partido y luego, agrega, había que construir un liderazgo gremial que se demostrara mejor, en términos de conseguir reivindicaciones inmediatas, que el que podían ofrecer otras tendencias.

A esto agrega Jorge Ramírez otro elemento, de índole cultural, que trasciende lo estrictamente educativo, el hecho de que los dirigentes solían ser, en su mayoría, de procedencia étnico-regional costeña y no serrana. Ello no quiere decir que los trabajadores de procedencia serrana no se integrasen a la lucha sindical, ya que, según Ramírez, lo hacían, con particular ahínco, pero más como obreros de base. Se repetiría a nivel sindical lo que Parodi(1986:37-54) señala que sucedía en la producción, donde el trabajador serrano parece ser que era un trabajador más empeñoso y disciplinado que el costeño, aunque sin la capacidad de relaciones públicas de este último.

Ahora bien, el liderazgo sindical solía plasmarse en caudillos. Ellos eran los que representaban a los partidos ante los trabajadores y, al mismo tiempo, las figuras en que estos se sentían representados. Delmer Quiroz (Parodi 1983) asegura que había una cierta necesidad de los obreros por reflejarse en un líder algo autoritario y arbitrario, quizás por influencias culturales anteriores que suponían un orden rigidamente jerárquico. El caso es que la FETIMP de los setentas fue un mundo de caudillos, cuyos períodos incluso están marcados por presencias parti-

cularmente fuertes. Angel Gallardo nos relata de un alejamiento temporal suyo de la Federación, en 1976, "porque todo era la polémica Chávez-Quiroz y no se veían los problemas concretos". Pero esta representación a través de caudillos presentaba una seria limitación para la politización de los trabajadores e incluso para la formación de cuadros de reemplazo en el gremio. Varios dirigentes de la época coinciden en señalar que la no existencia de líderes que pudieran tomar el lugar de los despedidos en el Paro Nacional de 1977, llevó a que el gremio metalúrgico no tuviera capacidad de respuesta frente a la represión gubernamental lo que sería causa de la grave crisis y posterior división de la FETIMP.

José Chávez Canales se queja de este mundo de caudillos, a pesar de que muchos lo consideran a él mismo el gran caudillo. Argumenta Chávez Canales que muchos incendiarios de mítines y asambleas tenían bases que rara vez se movilizaban y que prácticamente no conocían las posiciones políticas de sus líderes, llegando al extremo de únicamente ir a la huelga cuando se trataba de reivindicaciones propias. Dice que este fenómeno solía darse más entre los dirigentes de fábricas grandes, influidos por partidos radicales, que tendían a centrar su trabajo en captar a los dirigentes pero tenían poco que hacer con la politización de la base.

En esta expansión organizativa la FETIMP, a pesar del relieve nacional que llegó a alcanzar, actuó más como una coordinadora de los intereses parciales de cada sindicato que como una centralizadora del conjunto de la lucha metalúrgica. Es decir, su representación político-sindical, con todo lo agresiva e importante que era tanto para los propios metalúrgicos como, en términos de liderazgo, para otros sectores, no llega a expresar intereses comunes del gremio. Quizás una muestra de ello sea la imposibilidad de reactivar la lucha por el pliego único, que había sido, bajo otras condiciones y en una dimensión mucho menor, el eje reivindicativo de la década anterior. Tineo nos cuenta que, en la época de mayor auge de la Federación, entre 1972 y 1976, cuando 20 o más sindicatos base se hallaban en conflicto empezaba la pelea por llamar a un paro o a una huelga de la FETIMP. La actitud de los directivos variaba de acuerdo a la tendencia política de los sindicatos en lucha, así como a la intensidad de los conflictos parciales, pero la dinámica general llevaba, tanto al PC como a la Nueva Izquierda, a

sumar conflictos, cada cual por su cuenta, que pudieran administrar en el momento propicio, llevándolos, eventualmente, a la huelga. Esta dinámica, sin embargo, tenía las más de las veces al PC en contra de agudizar las acciones de fuerza y a los grupos de Nueva Izquierda tratando de sacarlas adelante.

Esta pugna por desarrollar el conflicto sindical tenía como escenario las Asambleas de la FETIMP, a las cuales podían asistir, con voz y voto, delegados de cada sindicato base. Ellas se convirtieron, en los años de auge, en un acto de confrontación, "a la mala", según Rufino Suyón, entre la Nueva Izquierda y el PC. Las maniobras estaban a la orden del día y poco podían lograr los delegados que no estuvieran alineados con alguna de las tendencias en pugna. Estas reuniones eran muy concurridas, no tanto por la mayoría de los delegados sindicales como por los obreros politizados de los sindicatos en conflicto y los propios militantes de los partidos de izquierda que, recuerda Angel Gallardo, "esperaban afuera, con sus palos, los resultados y esto era alentador porque había interés". Estas asambleas de delegados de la FETIMP se convirtieron así en un espacio de disputa que tenía más que hacer con ganarle la iniciativa política al adversario que con avanzar en un esfuerzo de dirección del gremio. La vitalidad que transmitía entonces la Federación como imagen hacia el exterior poco tenía que hacer con una capacidad orgánica de acción conjunta. Como decíamos líneas arriba el conflicto interno solo le permitía sumar pero no multiplicar la fuerza de sus partes.

Las asambleas de la FETIMP, sin embargo, eran consideradas por los activistas como una importante expresión de democracia que animaba de forma singular la vida del gremio. Un "rito" nos dice Suyón en actitud casi reverencial. Quizás esta consideración ocurría por contraste con otras federaciones cuyas reuniones no despertaban tanto interés en los partidos de izquierda o en la cúpula sindical. Así, Delmer Quiroz cree ver un logro, en particular de los grupos de la Nueva Izquierda, en la asistencia de obreros de base a escuchar las discusiones de sus dirigentes. Igualmente, cuando los dirigentes recuerdan este período de la vida de la FETIMP una de las cosas positivas que aparece es la imagen de aquellas reuniones, como el espacio de legitimidad democrática del gremio. Sin embargo, esta legitimidad no se basaba tanto en estrictos

mecanismos de representación democrática sino más bien en la presencia de las bases obreras en conflicto, en particular de los trabajadores politizados, en la capacidad de fiscalización que ellos podían ejercer sobre sus dirigentes y en las posibilidades de proyección política del conjunto.

La expansión organizativa se traduce en una mayor capacidad de lucha, principalmente por salarios y condiciones de trabajo. La forma privilegiada de esta lucha era la huelga económica que se desarrolla con particular intensidad entre 1972 y 1976. Es interesante cómo el gremio metalúrgico va de organizar paros de 24 y 48 horas, primero, a desarrollar, luego, dos huelgas, en 1974 y 1976. Esta actividad incluye acciones de solidaridad, como fueron una marcha en apoyo al pueblo de Chile y un paro de apoyo a los trabajadores de Chimbote, acciones más bien raras en el movimiento sindical.

La huelga económica tenía una lectura diferenciada para los dirigentes y para las bases, lo que daba elementos para establecer una relación utilitaria entre ambos. La huelga, especialmente para los dirigentes más radicales ligados a la Nueva Izquierda, era el primer paso de un proceso mayor de movilización que debía "agudizar las contradicciones" y llevar finalmente a la transformación revolucionaria de la sociedad. De allí que su objetivo fuera producirla y luego buscar radicalizarla. Enrique Tineo nos dice:

"Los partidos lo que buscaban era que el sindicato entre a la huelga. O sea que el pliego de reclamos era un medio y la huelga el objetivo, cuando debe ser al revés. El objetivo debe ser el pliego de reclamos y la huelga es el medio. Pero en esa época los partidos de izquierda como tenían la visión de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina querían exacerbar las contradicciones de clase y ponían la huelga como objetivo, el pretexto era el pliego de reclamos."

Delmer Quiroz, por otra parte, nos señala que:

"...si alguien juzgara las movilizaciones, el movimiento social de la época a partir de los comunicados de prensa, diría que esta fue una época en que habían soviets."

Esto es un esquema general, en el que cabían múltiples variantes de acuerdo a cada lucha concreta, pero donde casi siempre podíamos encontrar al PC tratando de avanzar con cuidado, en particular con cuidado de ir a choques frontales con el gobierno, y a los radicales tratando de convertir cada pequeño fuego en la lucha final. Las bases, en cambio, lo que buscaban era reivindicaciones concretas que satisficieran necesidades inmediatas, relativas a salarios y condiciones de trabajo.

La lucha es exitosa mientras existe una situación económica relativamente estable, pero sus posibilidades se empiezan a deteriorar con la crisis del velasquismo en 1975 y las sucesivas medidas anti-laborales de Morales Bermúdez entre 1976 y 1978. Por ello, es más o menos factible, hasta mediados de los años setentas, conseguir reivindicaciones con un discurso radical por lo que esta relación, entre dirigentes y bases, resulta productiva (Parodi 1986:65-69), pero con el inicio de la crisis económica van a ser cada vez más insuficientes el discurso radical y la táctica de la confrontación.

El logro de estas reivindicaciones, sin embargo, va a tener un costo importante cuya expresión más significativa serán los despedidos. La bandera de reposición aparecerá entre las demandas de la FETIMP, con mayor fuerza, a partir de 1974. Manuel Agüero (1980) señala que para julio de ese año la Federación tenía más de 40 trabajadores despedidos en sus diferentes sindicatos bases. En un primer momento el despido será producto de conflictos localizados entre una empresa y su sindicato. Además, era difícil para los empresarios despedir por la legislación vigente que favorecía a los trabajadores. En esos años de auge gremial la empresa solía usar artimañas para deshacerse de fuerza de trabajo que no deseaba, ya fuera por razones productivas o sindicales. El recurso más común fue aprovecharse de la indisciplina de los trabajadores en el mal uso de los permisos para ir a atenderse a los hospitales del Seguro Social. El mecanismo era sencillo: denunciar a quienes pedían salir y en lugar de ir a recibir atención médica iban a otra parte.

Pero recién será con el cambio de gobierno, de Velasco a Morales Bermúdez, en agosto de 1975, y, especialmente, con la declaratoria del Estado de Emergencia, en julio de 1976, que la cuestión se dejará sentir

con toda su fuerza, recibiendo los trabajadores el golpe mayor luego del Paro Nacional de julio de 1977.

Con el gobierno de Morales Bermúdez la cosa pasó de artimañas empresariales, con alguna eventual ayuda estatal, a una política estatal tendiente a despedir a la capa dirigente. Se empieza con la autorización de despidos masivos, aunque no exactamente en fábricas metalúrgicas pero sí en el área de Lima. Se continúa con el Decreto Supremo 011-76-TR, parte del Estado de Emergencia decretado para enfrentar la crisis política de mediados de 1976, que autorizaba el despido de todos aquellos que hicieran huelga. Esta última medida tiene especial incidencia en el gremio metalúrgico porque corta el ciclo ascendente de paros y huelgas que la FETIMP había venido llevando adelante y que había tenido su último episodio en una huelga de nueve días en junio de 1976. La actividad de la Federación queda totalmente paralizada durante el Estado de Emergencia, entre julio de 1976 y julio de 1977. Agüero (1980) contabiliza hacia junio de 1977 alrededor de 250 despedidos en el gremio metalúrgico, la abrumadora mayoría de los cuales se concentran en las bases grandes y más combativas. José Valdivieso señala que este debilitamiento fue consecuencia de la falta de voluntad política del PC, mayoritario en la dirigencia de la FETIMP, que vacilaba sobre si pasar o no a una actitud opositora frente al gobierno militar de Morales Bermúdez. En este año, aunque de manera muy precaria, los únicos sindicatos que buscan mantener un mínimo de actividad, en condiciones semi-clandestinas, son los influidos por partidos de la Nueva Izquierda.

Sin embargo, la medida más dura contra los metalúrgicos fue el Decreto Supremo que autorizaba el despido de todos aquellos trabajadores que participaron en el Paro Nacional del 19 de julio de 1977. De los aproximadamente cinco mil trabajadores despedidos en todo el país, los cálculos más conservadores señalan que aproximadamente 400 fueron metalúrgicos, incluyendo a la mayor parte de los dirigentes sindicales. A pesar que venían de un período de dispersión, la participación de la FETIMP en este Paro Nacional fue muy importante, no sólo por la paralización productiva sino también por la participación en movilizaciones callejeras y por la conjunción que en esas movilizaciones tuvieron con los pobladores de los barrios populares. Delmer Quiroz nos

dice que la relación con la población circundante a las fábricas había sido una de las primeras acciones que habían realizado los sindicatos metalúrgicos, por directiva expresa del gremio, desde principios de los años setenta. Esa relación se haría patente en este Paro, llevando a lo que Valdivieso denomina "el descubrimiento" del potencial de movilización de los pobladores a partir de la relación y el liderazgo obrero.

Pero los meses posteriores al Paro Nacional harían ostensible la rudeza del golpe y las debilidades de la Federación. Los problemas no empiezan con este despido masivo de dirigentes ni la FETIMP, tal como insiste Quiroz, se hallaba en su mejor momento en julio de 1977. El cambio de gobierno y la crisis económica y política habían dejado sentir su efecto en el deterioro de las condiciones de trabajo sindical, por lo menos desde un año antes, cuando la Federación tiene graves problemas para continuar sus actividades gremiales durante el Estado de Emergencia. Ello lleva a que la FETIMP no sea capaz de iniciar una lucha por la reposición de los despedidos. Es cierto, que esta incapacidad se enmarca dentro de las dificultades de la propia CGTP para llevar adelante una lucha de estas características, sin embargo, hay gremios como la Federación de Empleados Bancarios que sí son capaces de dar una lucha relativamente exitosa por la reposición de sus despedidos. Entre los metalúrgicos un sector de dirigentes, ligado a los partidos radicales, intenta llamar a una huelga para el 20 de setiembre de 1977, pero al no contar con el apoyo mayoritario de bases, bajo la influencia del PC, marchan al fracaso. En suma, las dificultades del gremio para reponer a sus despedidos marcarán una crisis que finalmente lo llevará, un año más tarde a la división.

Sin embargo, no sólo serán reivindicaciones económicas lo que consiguen los metalúrgicos. Múltiples autores (Parodi 1986, Nieto 1986, Balbi 1989) así como varios dirigentes sindicales señalan el cambio fundamental que se da en las relaciones entre patrones y obreros al interior de las empresas. Si bien, como señala Balbi (1989:54-59), se trata de un cambio suscitado por una correlación de fuerzas adversa para los empresarios, donde se juntaban la fuerza de la organización sindical con el empuje de las reformas de Velasco, no deja de tener efectos duraderos que favorecen la autonomía del espacio sindical y la integración política de los trabajadores. El trato patronal se caracterizaba por ser despótico,

donde el empresario asumía que tenía todos los derechos y no concedía ninguno a los obreros. Es decir, una relación de subordinación señorial que reproducía los roles de la sociedad rural tradicional, no muy lejana en el tiempo en el caso peruano. Ni siquiera había un cuidado por la reproducción misma de la fuerza de trabajo. Enrique Tineo recuerda que "a veces el trabajador estaba enfermo y una máquina malograda, pero los empresarios priorizaban el problema de la máquina", agregando al antagonismo clasista un agudo desprecio racial. Una relación, en suma, que se basaba en la mutua desconfianza total, donde no había sentido de empresa como aventura común, sino tan solo de confrontación, donde uno trataba de sacarle lo máximo al otro. Esta situación es la que cambian las reformas, en particular la estabilidad laboral, haciendo posible que trabajadores y empresarios puedan negociar en igualdad de condiciones sus diferencias. Delmer Quiroz agrega que las nuevas normas daban también referencias claras al empresario, permitiéndole una legalidad en su relación con los trabajadores de la que antes había carecido. Nieto (1986), entiende esta igualdad de condiciones al interior de la empresa como el logro de elementos de ciudadanía por parte del trabajador, por cierto muy importantes para su socialización política posterior. Algunos, sin embargo, son muy escépticos sobre los cambios reales que esto pueda haber producido entre los empresarios. Angel Gallardo, por ejemplo, que lleva negociando más de treinta años con empresarios del sector metalúrgico dice que "pueden haber cambios de formas y métodos, pero en el fondo tienen la misma posición". Tineo, de igual forma, señala que "los empresarios se envalentonan con Morales", aludiendo a la poca disposición patronal por una democratización permanente de las relaciones con los trabajadores al interior de la fábrica.

Ahora bien, la táctica de la huelga económica, como expresión máxima de la lucha sindical tiene límites y ello llevará a su crisis y división a la FETIMP. El primer elemento es la crisis económica y política global que lleva al cambio de gobierno. En ella se expresa un agotamiento del modelo de "sustitución de importaciones" que Velasco trata de implementar en toda su amplitud, pero también el reclamo empresarial para terminar con las concesiones hechas a los trabajadores. Además, también está la necesidad política del gobierno de Morales Bermúdez de destruir la capacidad de movilización del movimiento obrero, para proceder con la apertura política, lo que cobra particular importancia en

el caso metalúrgico por su peso específico, presencia limeña, liderazgo e influencia de la izquierda radical en sus filas.

Pero al margen de las causas de orden global existen factores específicos en el gremio metalúrgico que lo llevan a la crisis. La gran expansión organizativa que está a la base de la importancia que adquiere la FETIMP se logra a partir de una politización de pequeños grupos de trabajadores que se expresa en caudillos, las más de las veces eficientes en la consecución de reivindicaciones inmediatas pero limitados en lograr el compromiso masivo de los trabajadores en la acción sindical. Enrique Tineo, por ejemplo, nos señala que el sindicato "Nissan", con un alto grado de afiliación sindical, aproximadamente 500 sobre 600 obreros trabajando, concitaba tan solo alrededor de 50 para las tareas sindicales. Estos caudillos, asimismo, alcanzan su liderazgo en aguda competencia con otros caudillos pero de diferente tendencia política. Líneas arriba señalamos cómo esta competencia permitió en buena medida la expansión organizativa, sin embargo, en un segundo momento sus efectos son corrosivos. Esto sucede porque la competencia entre tendencias encabezadas por caudillos está signada por el ánimo de confrontación que busca eliminar al adversario y no encontrar puntos de confluencia con él. Es más, en los partidos más radicales la negociación se asociaba con traición. Esta idea de confrontación tiene un origen ideológico en el marxismo-leninismo que profesaban los partidos de izquierda presentes. Ello los llevaba, con particular agresividad en el sector metalúrgico por la importancia que tenían en él, no sólo a plantear el enfrentamiento con el Estado y los empresarios de forma que se agudizaran los conflictos, sino también a una hiperideologización del debate que descalificaba a todas las tendencias que no fueran la propia. Esta situación lleva a la debilidad orgánica de la FETIMP, convertida más en un espacio de disputa y a lo sumo de coordinación eventual, pero no de centralización y acción conjunta. La presencia izquierdista que tiñe inconfundiblemente el discurso quizás pueda llevar a una falsa impresión de organicidad por su activismo, pero la forma sectaria y partidarista en que se dió será en el mediano plazo motivo de debilidad antes que de fortaleza.

De igual forma el caudillismo partidarizado dificulta la reproducción de cuadros sindicales. El caudillo por su propia naturaleza hace difícil el trabajo en equipo y el partido está más preocupado por su desarrollo que

por el desarrollo del sindicato. Jorge Ramírez nos señala que en su experiencia de base jamás se hicieron "escuelas sindicales" que instruyeran a los trabajadores sobre los aspectos de la vida gremial, sino más bien "escuelas políticas", organizadas por una determinada tendencia, donde intentaban explicar a los obreros que se interesaban en la vida gremial las diferencias, muchas veces de matiz, entre los diferentes grupos de izquierda que hacían trabajo sindical. Pero la formalización del discurso llegaba a tal grado que muchas veces los trabajadores salían de esas "escuelas políticas" más confundidos de lo que habían entrado.

Por las características de esta politización sectaria y caudillesca es que la FETIMP no tuvo capacidad de respuesta cuando el gobierno de Morales Bermúdez despide a los dirigentes sindicales luego del Paro Nacional del 19 de julio de 1977. No hubieron dirigentes de reemplazo que pudieran tomar el lugar de los anteriores e intentaran con seriedad lograr la reposición. De allí que los múltiples esfuerzos se quedaron en iniciativas de pequeños grupos sin posibilidades de éxito. Es relevante que en estas condiciones el Partido Comunista se inhibe de plantear ninguna medida de lucha para lograr la reposición de los despedidos. Aquí parecen juntarse dos elementos. Por un lado el PC todavía se cuidaba mucho de enfrentarse al gobierno, su actitud misma en el impulso al Paro Nacional había sido ambivalente a pesar de lo cual sus cuadros fueron golpeados sin distinciones. Por otra parte, los adversarios radicales achacan su falta de iniciativa a que la mayoría de los despedidos eran de la Nueva Izquierda, lo que libraba al PC de sus rivales en el gremio.

Es claro entonces que esta incapacidad de respuesta es la que lleva a la división de la FETIMP. "Todos trabajan por la ruptura" nos dice, refiriéndose a los partidos, Enrique Tineo, en alusión al estilo imperante. Es decir, que con el tipo de politización desarrollado y el agotamiento de la huelga económica como principal forma de lucha, no habían posibilidades de un mayor desarrollo sindical en el período. La magnitud del problema se ve reflejada en la división que causa esta coyuntura de crisis tanto en el Partido Comunista como en el Partido Comunista Revolucionario, este último en aquel momento la principal fuerza de la Nueva Izquierda en metalúrgicos. La división del PC, la fuerza mayor del gremio, llevará a una radicalización del sector disidente, que incluía a

sus principales dirigentes metalúrgicos, juntando fuerzas y puntos de vista con la Nueva Izquierda. Ello lleva al PC oficial a organizar al año siguiente, 1978, su propia FETIMP, aprovechando del manejo que tiene de la central nacional, la CGTP.

Estas divisiones y reagrupamientos contribuyen, sin embargo, a la dispersión, restando a la FETIMP la fuerza política que había tenido hasta el Estado de Emergencia, julio de 1976, y quizás si hasta el Paro Nacional de julio de 1977. Pero lo que es más grave se daña la construcción del espacio sindical que se había venido desarrollando desde principios de la década del setenta.

D. EL CLASISMO METALÚRGICO Y LA APERTURA DEMOCRÁTICA

"Clasismo" era un término en disputa entre los metalúrgicos. Los obreros ligados a la Nueva Izquierda se llamaban a si mismos "clasistas" y decían que los simpatizantes del Partido Comunista no lo eran. Esto se debía a las connotaciones de la idea, si clasismo refería a autonomía de clase, los del PC eran acusados de conciliar con el gobierno militar, mientras los radicales no se contaminaban con nadie. Asumir la distinción, sin embargo, no sería exacto, porque el clasismo refiere a un fenómeno más profundo que tiene que ver con una identidad que surge de un proceso de construcción social de autonomía, particularmente acentuado en el sector metalúrgico. Tanto Enrique Tineo como Jorge Parodi (1986:177) coinciden en señalar que el clasismo era la consideración de la dignidad del trabajador, es decir, su consideración como persona. Tineo elabora al respecto y señala:

"Los obreros de base no creo que tuvieran esa seguridad en la inminencia de la revolución, lo tomaban en cuenta por la propaganda de los partidos, pero estaban más preocupados por la conquista de su dignidad, de su pliego de reclamos, de su bienestar, de su progreso como trabajadores."

Quizás la mejor anécdota que ejemplifica esto sea la que relata Delmer Quiroz cuando señala que los obreros de su sindicato base no tenían donde comer a la hora del refrigerio y lo hacían sentados en el suelo en

la puerta de la fábrica. Una de las primeras reivindicaciones, por eso, nos dice, fue "comer como gente" y exigieron, exitosamente, que la empresa construyera un comedor.

Ahora bien, esta consideración básica la logran los obreros a partir de su organización que les permite construir un espacio propio, como es el sindicato, con fuerza para luchar y lograr sus demandas. Este reconocimiento como personas, además, los hace pasibles de derechos, entre ellos el primero es el de negociar, al menos con igualdad jurídica, y tener derecho a estabilidad en el empleo. En metalúrgicos, a diferencia de otros sectores, se perciben más claramente estos elementos de ciudadanía económica y social como contenido de la identidad clasista. El hecho de que sean obreros que se enfrenten a empresarios, en tanto patrones, y no directamente al Estado como en Chimbote, permite que tomen algo más en cuenta los derechos que van obteniendo, los que son dados por un gobierno determinado y crean condiciones para luchar contra patrones específicos. Esto no quiere decir que no definieran su clasismo también en contradicción con el Estado, sino que hay una distinción objetiva entre dos adversarios diferentes, que permite, por ejemplo, que convivan posiciones diversas como el PC y la Nueva Izquierda.

Además de autonomía y derechos, que por si solos podrían hacer aparecer la identidad clasista como un almacigo de virtudes democráticas, existe también otro elemento, en el que insiste Parodi (1986:182-183), que es la confrontación. Los trabajadores logran sus demandas usando métodos de lucha que apelan a tácticas como la huelga económica, que busca derrotar al adversario y obligarle a aceptar determinadas condiciones. El orden es claro, primero es la fuerza y luego el diálogo. El clasismo es entonces un logro de la fuerza independiente de los trabajadores.

Pero ¿cómo se ve el Estado desde este clasismo metalúrgico? Enrique Tineo alude a: "una desconfianza natural por tantos atropellos que se ha tenido, una desconfianza automática del trabajador por el Estado", sentimiento que como vimos se extiende también a la autoridad dentro de la empresa, abonando en favor de la actitud de confrontación característica del clasismo. Tineo señala que se trata de un sentimiento de distancia que les viene de sus ancestros y que tiene que ver con el rol

opresivo del Estado y los gamonales, particularmente en el mundo rural tradicional, de donde provenían en primera o segunda generación buena parte de los metalúrgicos. Quiroz, en este mismo sentido, califica la diferencia entre los trabajadores y la autoridad estatal como "cultural", agregando el componente militar como un elemento más en favor de esta distancia. Esto lleva, en las versiones más radicales, a afirmaciones como las de Rufino Suyón cuando dice: "no nos interesaba la diferencia entre Velasco y Morales" ya que a fin de cuentas ambos representaban al Estado. Este extremo no es compartido por la mayoría de los dirigentes pero nos hace ver como anidaba en ellos la certidumbre de una distancia muy difícil de salvar.

A esta desconfianza, de raíces más bien estructurales, frente al Estado se suma la influencia ideológica izquierdista para configurar la actitud de los metalúrgicos sobre el problema de la democracia, que se hace explícita con motivo de la convocatoria electoral del gobierno de Morales Bermúdez. Nuevamente aquí como en otros aspectos vamos a encontrar diferencias entre el Partido Comunista y la Nueva Izquierda. Mientras el primero se encontraba muy preocupado por el porvenir de las reformas velasquistas en el nuevo gobierno de Morales Bermúdez y le interesaba negociar el futuro de estas, la segunda continuaba, casi incólume, con su misma estrategia de revolución inmediata. En ningún caso la democracia se encontraba en agenda.

Así, tenemos que desde diferentes experiencias personales ya teñidas por su encuentro con las diferentes opciones izquierdistas, aparecen también otras desconfianzas frente a la cuestión. Angel Gallardo, veterano dirigente metalúrgico, cuya idea de la democracia seguramente se asociaba más con los gobiernos civiles anteriores a 1968, como el de Prado o Belaúnde, dirá: "la democracia está enlazada con las posiciones de derecha, con el APRA, PPC y AP que son los que tienen más influencia", argumentando que los trabajadores no tenían como participar porque no se habían preparado para ello, que los únicos que tenían ese conocimiento eran los líderes de los partidos de derecha. De igual forma, Rufino Suyón, que reitera la importancia de la ideología marxista, señala: "lo de la representación era caer en las maniobras de la burguesía", una distracción del verdadero camino de la revolución, por lo que

vierte su desprecio por los dirigentes izquierdistas que habiendo predicado una cosa se apresuraron a participar en las elecciones.

Enrique Tineo recuerda que la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente hizo entrar en crisis a los partidos de izquierda que trabajaban en el sector metalúrgico. Estos se debatieron entre una actitud, más bien utilitaria, de participar y la fidelidad a lo que fue una consigna muy difundida del período: ¡Abajo la dictadura, gobierno popular! Sin embargo, a pesar del peso de las posturas radicales en el gremio, finalmente no tendrían mucha influencia los que persistían en el boicot electoral, imponiéndose la actitud de la mayoría de la vanguardia sindical que frente a la imposibilidad práctica de realizar utopías revolucionarias prefería apoyar cualquier posibilidad de retiro de los militares.

Parece ser que no era el mejor momento, por las duras condiciones impuestas por el gobierno de Morales Bermúdez a los gremios de trabajadores, para que se produjera un cambio de perspectiva en partidos acostumbrados a realizarse en el trabajo sindical y la propaganda de consignas estratégicas. En este sentido José Valdivieso señala, que al menos en el caso de los grupos de la Nueva Izquierda, la convocatoria a elecciones les planteaba la necesidad de asumir su existencia directamente y no a través del control de tal o cual sindicato. Esta última cuestión supondría en los años siguientes la desaparición de buena parte de los grupos izquierdistas, quedando y ampliando su radio de acción únicamente los más significativos.

La democracia como forma de representación política quedaba así fuera de la identidad clasista metalúrgica. Esta última expresaba la construcción de un espacio social inmediato, como era el sindical, e incluso el liderazgo de otros sectores sociales como las organizaciones barriales. Su proyección político-estatal, sin embargo, se reducía al discurso ideológico de partidos de izquierda que no estaban interesados en levantar ninguna alternativa política.